

SESIONES ORDINARIAS

1999

ORDEN DEL DIA N° 1999

COMISIONES DE JUSTICIA,
DE LEGISLACION PENAL, DE DROGADICCION,
DE FINANZAS Y DE TRANSPORTES

Impreso el día 20 de mayo de 1999

Término del artículo 113: 4 de junio de 1999

SUMARIO: Régimen de reforma del delito de encubrimiento y creación de un sistema para la prevención y represión del lavado de activos provenientes de delitos de especial gravedad.

1. — (33-P.E.-1998.)
2. — Larraburu. (4.751-D.-1998.)
3. — Alvarez (C. A.) y otros. (5.564-D.-1998.)
4. — Alvarez (C. A.). (5.630-D.-1998.)
5. — Pichetto. (830-D.-1999.)¹
6. — Carrió y otros. (866-D.-1999.)¹

I — Dictamen de mayoría.

II — Dictamen de minoría.

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia, de Legislación Penal, de Drogadicción, de Finanzas y de Transportes, han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, así como aquellos proyectos de ley de la señora diputada Carrió y otros señores diputados, del señor diputado Pichetto, del señor diputado Larraburu, y de los señores diputados Alvarez (C. A.) y otros, y teniendo a la vista el expediente 4.885-D.-1998 de los señores diputados Raimundi y Viqueira, por los cuales se previene y reprime la legitimación de activos provenientes de ilícitos; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconsejan la sanción del siguiente

¹ Reproducido.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Reforma del delito de encubrimiento y creación de un sistema para la prevención y represión del lavado de activos proveniente de delitos de especial gravedad.

CAPÍTULO I

Modificación del Código Penal

Artículo 1º — Sustitúyese la rúbrica del capítulo XIII del título XI del Libro Segundo del Código Penal ("Encubrimiento"), por el de "Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 277: 1) Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

- a) Ayudare a un sujeto eventualmente responsable a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta;
- b) Ocultare, alterare o hiciera desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al responsable a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer;
- c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito;
- d) No denunciare la perpetración de un delito o la individualización del responsable de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole;
- e) Asegurare o ayudare a un responsable a asegurar el producto o provecho del delito.

2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:

- a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión;
- b) El autor actuare con ánimo de lucro;
- c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.

La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

3) Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1 e) y del inciso 2 b).

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 278: 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo, dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran, la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a), el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277.

2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte al ciento cincuenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito.

3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277.

4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 o 3 de este artículo podrán ser decomisados.

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 279: 1) Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.

2) Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil a veinte mil pesos o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2.

3) Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277, incisos 1 o 2, o en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u oca-

sión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran inhabilitación especial. En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno a cinco años de inhabilitación.

4) Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.

CAPÍTULO II

Unidad de Información Financiera

Art. 5º — Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) como entidad autárquica del Estado nacional regida por las disposiciones de la presente ley.

Art. 6º — La UIF gozará de total autonomía funcional y será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir, impedir y sancionar la legitimación de activos provenientes de:

- Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
- Delitos de contrabando de armas (ley 22.415);
- Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;
- Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
- Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal);
- Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del libro Segundo del Código Penal.

Art. 7º — La UIF tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias en el resto del país.

Art. 8º — La UIF estará integrada por ocho miembros designados de la siguiente manera:

Un funcionario del Banco Central de la República Argentina, un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, designados por el respectivo organismo y un experto en temas relacionados con el lavado de activos designado por la Secretaría de Programación Para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Estos miembros deberán ser funcionarios de carrera con más de cuatro años de antigüedad y designados por concurso interno del organismo respectivo.

Cinco expertos financieros seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión *ad hoc* integrada de la siguiente forma:

- Dos miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios.
- Dos funcionarios del Ministerio Público elegidos por el procurador general de la Nación.
- Un miembro del directorio del Banco Central elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios.
- Un miembro designado por el ministro de Justicia.

Art. 9º — La selección de los expertos financieros se ajustará a las siguientes directivas:

- Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. La comisión *ad hoc* convocará a concurso dando a publicidad las fechas de exámenes;
- Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación y los antecedentes que serán computables.

La prueba de oposición procurará evaluar tanto la formación teórica como la práctica.

La comisión *ad hoc* realizará la preselección de los postulantes a integrar la Unidad de Información Financiera a los efectos de preparar una nómina de aquellos que acrediten idoneidad suficiente para presentarse al concurso público de oposición y antecedentes.

Art. 10. — Los miembros de la UIF tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos.

Durarán cuatro años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de cámara de la justicia nacional.

Podrán ser removidos de sus cargos por el voto de las dos terceras partes de los miembros totales del cuerpo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa.

Art. 11. — Para ser integrante de la UIF se requerirá:

1. Poder título universitario de grado, preferentemente en derecho, o en disciplinas relacionadas con las ciencias económicas o con las ciencias informáticas.
2. Poser antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Art. 12. — La UIF contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, la Dirección General Impositiva, la Administración de Aduanas, la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La UIF podrá solicitar a otros titulares de organismos de la administración pública nacional la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.

Art. 13. — Es competencia de la UIF:

1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley.
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar legitimación de activos proveniente de los ilícitos previstos en el artículo 69 de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.
4. Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Art. 14. — La UIF estará facultada para:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

No podrá oponerse a la Unidad de Información Financiera disposición alguna que establezca el secreto de la información requerida.

2. Recibir declaraciones voluntarias.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla.
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al juez competente la suspensión de la ejecución de cualquier operación o acto informado conforme al inciso b) del artículo 21 antes de su realización cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 69 de la presente ley.
6. Solicitar al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación.

7. Disponer la implementación de sistemas de control interno para las personas a que se refiere el artículo 20, en los casos y modalidades que la reglamentación determine.

8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.

9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia UIF o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter.

10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley.

Art. 15. — La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:

1. Presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Drogadicción, o sus equivalentes de ambas Cámaras, al menos una vez durante el período ordinario, a los efectos de informar sobre la marcha de sus actividades.

2. Conformar un registro único de activos con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.

Art. 16. — La UIF se reunirá en sesiones plenarios al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de cinco miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta ley prevea una mayoría especial.

Art. 17. — La UIF recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar que la suministren. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el artículo 21 de esta ley podrán formular denuncias ante la UIF.

Art. 18. — El cumplimiento de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 18. — El cumplimiento de buena fe, de la las investigaciones dispuestas o dirigidas por la UIF, surgieren elementos de convicción suficiente para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerzan la acción penal.

CAPÍTULO III

Deber de informar. Sujetos obligados

Art. 20. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente ley.

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual, operen en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio y los organismos administrativos de fiscalización y control de personas jurídicas.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Los escribanos matriculados.
11. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
12. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.
14. Las personas físicas o jurídicas inscritas en los registros establecidos por el artículo 23 inciso t) del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
15. Los productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de segu-

ros cuyas actividades están regidas por las leyes 20.091, 22.400 y sus modificatorias, concordantes y complementarias.

16. Los profesionales, matriculados cuya actividad esté regulada por los consejos profesionales de ciencias económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio.
17. Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia.

No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario o profesional, los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato, cuando el requerimiento de información sea formulado por la Unidad de Información Financiera o por un tribunal competente, con fundamento en esta ley.

Art. 21. — Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:

- a) Recabar de sus clientes o requirientes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.

Cuando los clientes o requirientes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad real de la persona o personas por quienes actúen.

Toda esta información deberá archivarla por el término y según las formas que la UIF establezca;

- b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley, se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, así como también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.

La UIF establecerá las modalidades, oportu-

nidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad;

- c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Art. 22. — Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.

El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la unidad de Información Financiera, serán reprimidas con prisión de 6 meses a 3 años. El máximo de la escala penal será de seis años, si la infidencia perjudicare manifiestamente al desarrollo de la investigación.

CAPÍTULO IV

Régimen penal administrativo

Art. 23. — 1. — Será sancionada con multa de dos a diez veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278, inciso 1, del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.

2. — Cuando el mismo hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos en el sentido del artículo 278, inciso 2, del Código Penal, la multa a la persona jurídica será del veinte al sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito.

3. — Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil a cien mil pesos.

Art. 24. — 1. — La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.

2. — La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto personalmente infractor.

3. — Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil a cien mil pesos.

Art. 25. — Las resoluciones de la UIF previstas en este capítulo serán recurribles ante la justicia en el fuero contencioso administrativo.

Art. 26. — Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1.101 y siguientes y 3.982 bis del Código Civil, entendiendo por "acción civil" la acción "penal-administrativa".

Art. 27. — En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a financiar el funcionamiento de la UIF, los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424 y los de salud, capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

CAPÍTULO V

El Ministerio Público Fiscal

Art. 28. — El fiscal general designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal.

Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica de Ministerio Público.

CAPÍTULO VI

Disposiciones generales

Art. 29. — En caso de actividades relacionadas con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, se aplicarán las previsiones de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, en cuanto fueran compatibles.

Art. 30. — Deróganse el artículo 25 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90.

Art. 31. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 18 de mayo de 1999.

Juan C. Maqueda. — Irma F. Parentella.
— Jorge T. Pérez. — Pablo D. Fernández.
— Silvia V. Martínez. — Marlo A. Nieva. — Eduardo C. Avila. — Elsa A. Fernández de Combes. — Diana B. Gutiérrez. — Bernardo P. Quinzio. — Edmundo del Valle Soria. — José I. Caffarata Nores. — Alicia A. Castro. — Mirian B. Curretti de Walsfeld. — María I. García de Cano. — Gustavo E. Gutiérrez. — Sara C. Liponezky de Amavet. — Ricardo N. Vago. — Miguel A. Abella. — Sergio E. Acevedo. — Martha C. Alarcía. — Normando M. Alvarez García. — César Arias. — Manuel J. Baladrón. — Carlos A. Becerra. — Marcela A. Bordenave. — Carmen del Rosario Caillet. — Elisa M. A. Carrió. — María L. Chaya. — Melchor R. Cruchaga. — Guillermo H. De Sanctis. — Herminia E. Escalante Ortiz. — Víctor M. F. Fayad. — Francisco A. García. — Amalia Isequilla. — Mabel H. Müller. — Mario R. Negri. — Norberto R. Nicotra. — Marta I. Ortega. — Lorenzo A. Peps. — Horacio F. Pernasetti. — Miguel A. Pichetto. — Juan C. Piriz. — Héctor R. Romero. — Mario A. Santander. — Carlos E. Soria. — Alfredo R. Speratti. — Arnaldo M. P. Valdovinos. — Marcelo E. Vensentini. — Carlos A. Vilche.

En disidencia parcial:

Guillermo R. Aramburu. — Dámaso Larra-
buru. — Guillermo A. Francos. — Juan
P. Caffero. — Diana B. Conti. — Nilda
C. Garré. — Alberto A. Natale. — Mar-
celo J. A. Stubrin. — Julio A. Tejerina.
— Ramón H. Torres Molina. — Jorge
Zapata Mercader.

INFORME

Honorable Cámara:

En los últimos años se ha manifestado una importante expansión del fenómeno delictivo del lavado de activos, capitales y bienes provenientes de ilícitos. Este incremento ha sido impulsado en gran medida por el tráfico de estupefacientes pero también de otras actividades delictivas como son el contrabando de armas, los hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales, o de delitos contra la administración pública entre otros. Lo cierto es que se ha puesto en evidencia el desarrollo

del comportamiento delictivo por parte de individuos aislados pero fundamentalmente de grupos organizados que no sólo actúan lavando capitales en el país en donde cometen el delito sino que fundamentalmente lo hacen a escala internacional. La complejidad organizacional delictiva actual es el reflejo de la complejidad económica y social y moderna. El notable crecimiento de la legitimación de activos, capitales y bienes obtenidos en forma ilícita, tiene efectos perjudiciales sobre las estructuras económicas, sociales y políticas, especialmente en naciones emergentes o vulnerables.

La presente normativa tiene como objetivo fundamental evitar y prevenir el lavado de dinero. En este sentido y tomando en cuenta la legislación internacional se establecen obligaciones a entidades tales como los bancos, los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, las empresas aseguradoras, etcétera. Es decir, internacionalmente se ha aceptado que no puede atribuirse sólo a los órganos represivos del Estado el control de las operaciones de lavado de dinero. En este sentido, esta ley confía a ciertos intermediarios determinadas funciones de capacitación de información, mientras que se crea una Unidad de Información Financiera que tendrá como función el examen de los datos proporcionados por estos sujetos.

La Unidad de Información Financiera será la entidad encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir, impedir y sancionar la legitimación de activos provenientes de delitos específicamente expresados en la ley. Estos son: delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737), delitos de contrabando de armas (ley 22.415), delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal, hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 21 p del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales, delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal), delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y X bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal.

La UIF actúa como "organismo filtro", ya que recibe la información de operaciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados por la ley y evalúa el grado de sospecha, dando —en caso positivo— intervención al Ministerio Público.

Es importante destacar que la UIF es una entidad autárquica del Estado nacional y que gozará de total autonomía funcional.

La Unidad de Información Financiera estará integrada mayoritariamente por técnicos financieros. Teniendo en cuenta que este organismo tendrá funciones sumamente complejas y técnicas que requieren un alto grado de conocimiento y especialización, el mismo estará integrado mayoritariamente por expertos designados por concurso público de oposición y antecedentes.

También la integrarán un funcionario del Banco Central de la República Argentina, un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos designados por el respectivo organismo y un experto en temas relacionados con el lavado de activos designado por la Secretaría de Programación para la Prevención de

la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Es importante mencionar que estos miembros deberán ser funcionarios de carrera con más de cuatro años de antigüedad y designados por concurso interno del organismo respectivo, de esta manera se evita la designación de funcionarios políticos con poca experiencia o idoneidad en la tarea de análisis de información financiera y detección de operaciones de legitimación de activos provenientes de ilícitos. Se procura garantizar entonces que los funcionarios de los organismos del Estado que integrarán la UIF sean expertos y técnicos con idoneidad para cumplir las funciones encomendadas en la presente ley.

Por su parte, para ser miembro de la UIF se establecen ciertos requisitos. Así, se requiere: a) Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho, o en disciplinas relacionadas con las ciencias económicas o en las ciencias informáticas; b) Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia; c) No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso.

Como vemos se han tomado todos los recaudos posibles para que la entidad encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir la legitimación de activos esté integrada por miembros idóneos, con conocimientos técnicos y experiencia en la materia.

En cuanto a las facultades de la UIF, creemos que ella fundamentalmente debe recibir y coordinar información, para que cuando del análisis surja la convicción de que se trata de una actividad de lavado de dinero, poner los elementos reunidos a disposición del Ministerio Público para que ejerza la acción penal. Para el eficaz cumplimiento de sus funciones se atribuye a esta entidad la facultad de solicitar informes y documentos a cualquier organismo público y a personas jurídicas públicas o privadas, recibir declaraciones voluntarias, requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas obligadas a informar operaciones sospechosas, actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de sus funciones, etcétera.

En definitiva, la aprobación del presente proyecto constituirá el marco jurídico necesario para prevenir, controlar y sancionar la legitimación de activos provenientes de ilícitos. Debe destacarse que en la actualidad nos enfrentamos con "actividades globales de lavado de dinero". El creciente profesionalismo y la creciente complejidad de las estrategias de lavado de dinero nos obligan a admitir un proceso deliberado de globalización. El lavado internacional de dinero persigue varios fines e implica una serie de mecanismos y operaciones complejas que pueden sobrepasar la capacidad de las estrategias nacionales para la prevención y sanción de este delito. Una de estas finalidades radica en la posibilidad de evitar una jurisdicción más desfavorable, en la cual existan normas y políticas eficaces para controlar el crimen dada la actualización de los sistemas de derecho penal de ciertos países en esta materia.

El lavado internacional pretende buscar y encontrar cuáles son las jurisdicciones y sistemas que constituyen el eslabón más débil en la cadena mundial, tanto en términos normativos como en la efectiva aplicación y vigencia de estas normas, a través de la ubicación de las operaciones, las comunicaciones y los bienes y capitales a aquellas jurisdicciones que cuentan con escasa o nula legislación en la materia, autoridades y sistemas de control más débiles. En este sentido y ante el avance internacional de las operaciones de lavado de dinero es importante para nuestro país la adopción de esta legislación tendiente a prevenir y controlar la legitimación de activos proveniente de actividades ilícitas.

Disposiciones penales y penal-administrativas concernientes al "encubrimiento" y "lavado de dinero"

I. Presentación general

1. Objeto

El presente texto pretende presentar los lineamientos del dictamen, con relación al capítulo de disposiciones penales referidas al delito de "lavado de dinero". Como se sabe, este tema ha motivado diversos proyectos, tanto del Poder Ejecutivo nacional como de algunos miembros de la Honorable Cámara de Diputados, que en definitiva concluyeron con el dictamen de mayoría de las comisiones intervinientes que aquí se desarrolla.

El despacho parte de los siguientes objetivos y presupuestos:

2. Independencia entre las disposiciones penales y la regulación de la Unidad de Información Financiera (UIF)

En principio, se parte de la base de que la regulación punitiva, por un lado, y la regulación referida al organismo que centralice la información sobre "operaciones sospechosas" (UIF)¹ no necesariamente tienen que estar coordinadas o integrar un mismo cuerpo legal y que, en caso de integrarlo en la sanción legisferante en sí, ello no sería obstáculo para que una parte del articulado pase a integrar el Código Penal y otra corresponda al derecho administrativo o derecho penal administrativo.

En efecto, las disposiciones penales podrían ser incorporadas lisa y llanamente al Código Penal, tal como ocurre en Alemania y en España, y la regulación sobre la UIF podría estar contenida en una ley independiente. En particular las atribuciones de la UIF y muchos factores de detalle tienen una complejidad que no tiene la regulación del tipo penal del lavado de dinero. En cualquier caso, sólo es preciso que entre ambas regulaciones no existan decisiones contradictorias. Pero, más allá de eso, existe un amplio margen de independencia.

¹ En los diversos proyectos, este organismo es denominado, con diferentes nombres; por razones prácticas se lo menciona aquí con la expresión: "Unidad de Investigación Financiera" (UIF), sin que esto implique negar que pueda haber nomenclaturas preferibles.

Para poner ahora tan sólo un ejemplo: uno puede decidirse en favor de una regulación sobre el tipo penal del "lavado de dinero" que comprenda a los bienes producidos por cualquier delito, o bien, al contrario, por un abanico de delitos —que podrá ser más o menos extenso—, y, sin embargo, tomar, por otro lado —en cualquiera de los dos casos—, la decisión de concentrar los esfuerzos de la UIF en procesar la información que *ex ante* aparezca como vinculada sólo a un determinado grupo de delitos (por ejemplo, tráfico de drogas, de armas, delincuencia organizada, etcétera). Incluso no es seguro que esto —delimitar la competencia de la UIF según la naturaleza del hecho previo— debiera estar regulado en la ley, pues al no ser la UIF, propiamente, un órgano del Poder Judicial, sino cumplir una función de relevamiento de datos, podría dejarse librado a la decisión de la unidad misma, bajo reglas de *oportunidad*, el orientar la investigación hacia una clase de lavado o hacia otra, lo cual podría variar según las épocas.

El presente despacho, por tanto, sólo pretende ser un *modelo posible* de la regulación *punitiva* del lavado de dinero y sólo incorpora también algunas reglas de derecho penal administrativo, que acompañan a la ley a dictarse sobre disposiciones penales o a la regulación sobre la UIF, según lo estime conveniente la Honorable Cámara en el plenario.

3. Objetivos principales del sistema punitivo propuesto

A) Eficacia

Con relación al sistema punitivo en sí mismo, se intenta lograr una mayor eficacia. Por "eficacia" se entiende aquí que los casos que sean *detectados* y *llevados a los tribunales* pueden ser reprimidos conforme a disposiciones que respeten las garantías constitucionales y el *principio de proporcionalidad* de la pena, estableciendo también con precisión la conducta prohibida, a la vez que permita contar con una herramienta clara para sancionar las conductas detectadas, sin que este resultado quede frustrado por insuficiencias técnicas.

B) Garantías

Pero se trata, también, de que estos objetivos no violen en *ninguna medida* las garantías constitucionales básicas, que en muchos momentos de la historia argentina de los gobiernos *de jure*, por marcos causados por las "cruzadas punitivas contra el mal en el mundo", han llevado al establecimiento de reglas jurídicas que hasta a un gobierno *de facto* le habría costado establecer. El punto más paradigmático de esta cualidad, en lo que respecta al delito de "lavado de dinero", lo constituye el último párrafo del artículo 25 de la Ley de Estupeficientes hoy vigente. Esta disposición permite al tribunal que entiende en la causa criminal "la incautación de las ganancias o bienes presumiblemente derivados de los delitos" descritos en dicha ley. Hasta aquí, como regulación de una medida cautelar, puede no ser objetable, aunque bastaría ya con las reglas generales válidas para cualquier delito. Sólo que a renglón seguido el precepto establece que "durante el proceso el interesado podrá probar su legítimo origen, en

cuyo caso el tribunal ordenará la devolución... (etcétera)", como derivado de lo cual, en definitiva, se establece una inversión de la carga de la prueba para aplicar la *pena accesoria del decomiso* (artículo 23, Código Penal), aunque *no estuviera probado el delito* ni la relación entre su eventual comisión y el dinero concretamente secuestrado, en violación al principio de inocencia (artículos 18, 19, 33, Constitución Nacional; artículo 8º, apartado 2, g, Convención Americana sobre Derechos Humanos).

C) Proporcionalidad

Por otra parte, se intenta establecer el "lavado de dinero" como un delito *genérico*, posible respecto de bienes provenientes de *cualquier clase de delito*, como una forma más grave de encubrimiento. Esto persigue, a la vez, en la medida de lo posible, poner en un pie de proporcionalidad la reacción penal contra el lavado de dinero proveniente del tráfico de estupeficientes, respecto del lavado de dinero que se pudiera realizar con relación a bienes cuyo origen ilícito sea el de otros delitos, que pueden ser tan graves o más graves que el tráfico de estupeficientes.

Lamentablemente, este propósito —de lograr un pie de igualdad o proporcionalidad— sólo puede ser logrado *en parte*, porque, por otro lado, el despacho establece un principio de limitación de la escala penal aplicable al lavado de dinero, cuando el delito precedente, origen de los bienes malhabidos, tiene prevista una escala penal menor (ver el artículo 279, inciso 1, PA). No se ve razonable que aquel que recibe dinero proveniente de un cohecho, por ejemplo, sea más gravemente penado que el autor del cohecho mismo. Mas, el ideal de poner en un plano proporcional al lavado de dinero o de bienes provenientes del tráfico de drogas respecto de la acción de lavar dinero proveniente de otros delitos, necesariamente requeriría reducir el marco penal del actual artículo 25 de la Ley de Estupeficientes (2 a 10 años de prisión), pues hay muchos hechos punibles cuya comisión genera enriquecimiento y que están sometidos a una escala penal menor a la del tráfico de estupeficientes y que en realidad *no son menos graves*. Esta anomalía, sin duda, no proviene de la "benignidad" de la pena de esos otros delitos, sino de la excesiva acentuación del disvalor propio del delito de tráfico de estupeficientes, en el contexto general de las valoraciones punitivas.

El hecho de que el disvalor atribuido al tráfico de estupeficientes, por sobre otros delitos, es una decisión axiológicamente desviada puede demostrarse así. Incluso con nuestras actuales concepciones morales, sociales y jurídicas sobre lo *correcto* e *incorrecto*, uno podría imaginarse fácilmente una sociedad futura que decidiera permitir el *libre comercio de drogas*, sujetando a éste a un control estatal similar al de los medicamentos y, por tanto, una sociedad en la que esa acción esté permitida (de hecho, el caso existe en diversos países). Por contraposición, al menos bajo esas mismas concepciones nos parece *imposible* imaginarnos una sociedad que permitiera el cohecho o el peculado de funcionarios públicos, o el robo con armas. Pero el cuadro

valorativo actual de nuestro Código Penal, sin duda en violación al principio constitucional de proporcionalidad (principio de *igualdad relativa*), pone el acento en el delito de tráfico de estupefacientes, como si éste fuera mucho más grave que el peculado o el robo con armas.

Ocorre, empero, que en las condiciones actuales sería difícil lograr el consenso suficiente como para morigerar todas las escalas penales de la Ley de Estupefacientes y poner a los hechos incriminados por ella en consonancia con las demás valoraciones del Código Penal. Por consiguiente, el despacho apenas se anima a lograr —con cierta austeridad— los siguientes objetivos: presentar al “lavado de dinero” como un delito posible con relación al dinero o bienes provenientes de *cualquier* delito, pero estableciendo a la vez que la escala penal del delito precedente, eventualmente menor a la del lavado, funcione como límite punitivo posible en cada caso concreto. En los resultados prácticos, este sistema mantendrá la desproporción en favor de la mayor gravedad (injusta) de la reacción contra el “narcotráfico”, en razón de la gravedad del marco penal del delito de narcotráfico, no por una escala penal mayor especialmente pensada para el lavado de dinero proveniente de este delito. En pocas palabras, la escala penal en sí del artículo 278 de este despacho es idéntica para todos los casos, sólo que la limitación del artículo 279, inciso 1, PA, produce una limitación para los casos en que el hecho precedente impusiera una escala penal menor.

D) ¿Necesidad real del delito de “lavado de dinero”?

Por último, al llegar al mentado establecimiento de un tipo penal general de “lavado”, como forma agravada de encubrimiento, se reflexionó primeramente sobre la cuestión de hasta qué punto eso es estrictamente necesario.

El despacho parte de la base de que la necesidad de agravar el lavado de dinero respecto de cualquier otra forma de encubrimiento podría ser puesta en discusión. Esta cuestión previa puede ser explicada así: Básicamente, en verdad, la operación de lavado implica siempre un acto de encubrimiento, al menos en la forma del artículo 277, inciso 2, Código Penal vigente.

Quien recibe, por ejemplo, dinero proveniente del narcotráfico para realizar una operación que permita al inversor llevarse “limpio” el dinero que trae “sucio”, en cualquier caso le “ayuda a alguien a procurar la desaparición de los rastros, pruebas o instrumentos del delito” o bien le ayuda a ese alguien “a asegurar el producto o el provecho del mismo”, en el lenguaje del artículo 277, inciso 2, citado. En este sentido, no se puede entender por qué algunos jueces archivan la causa en la que conocen por “lavado de dinero” en el sentido del artículo 25 de la Ley de Estupefacientes, cuando comprueban que el dinero tiene un origen delictivo pero distinto al del tráfico de drogas, si de todos modos habría siempre “encubrimiento simple” en el sentido del Código Penal.

De todos modos, en el momento actual podría tener un efecto simbólico extraño derogar la figura de lavado de dinero de la Ley de Estupefacientes y de-

jar regido todo el problema por el delito de encubrimiento. La corriente internacional, muy extendida, en pos de ver a este delito en una posición *destacada*, haría poco explicable que a pocos años de la vigencia de la incorporación de esta figura a la legislación argentina, circumscripita al lavado de dinero proveniente de tráfico de estupefacientes, fuera ahora “derogada”. En el lenguaje simbólico que siempre encierra el derecho penal, el riesgo de incorporar una figura delictiva en particular consiste —más allá de otros riesgos— en que su abrogación puede volverse imposible *después* aunque se revele como inútil; imposible, en fin, desde el punto de vista de los “efectos simbólicos”.

Existe, por lo demás, otro argumento de mayor peso en favor de la respuesta favorable a la incriminación particular del lavado como forma particular *agravada*.

En algunos casos se ha argumentado aproximadamente así: el “dinero lavado” necesita ser rápidamente reinvertido en el negocio ilícito y, en este sentido, encierra constantemente el riesgo abstracto y general de un auxilio *sin más* al delito mismo, al sostenimiento de la empresa criminal, el lavado ocurriría como último paso de un circuito que inmediatamente necesita comenzar de nuevo, en el financiamiento y funcionamiento de la empresa, entendida como “criminalidad organizada”. Mientras que el ladrón normalmente consumirá el botín, tras convertirlo en bienes fungibles, el narcotraficante u otra clase de sujetos del “crimen organizado” necesitan utilizar el patrimonio en el sostenimiento de la empresa, y al mismo tiempo darle visos de legitimidad a esas fuentes de financiamiento. Este argumento tiene cierta analogía con la expresión del procurador general Becerra, cuando en su exposición ante la reunión de comisiones, manifestó que la represión del lavado de dinero no tiende tanto a proteger la administración de justicia (así, la punición del delito de encubrimiento) como a darle un golpe financiero al narcotráfico (así, la punición del delito de lavado de dinero).

Estos argumentos tienen su lado correcto, pero también su dosis de debilidad. Por un lado, la necesidad de reinversión del resultado del delito en la empresa criminal, no es *elemento del tipo* del delito de lavado de dinero, es decir, que una operación de lavado no dejaría de ser delictiva por más que el empresario ilícito haya decidido, con ese último acto, retirarse definitivamente del negocio y, a su vez, el autor del lavado en sí, cooperador en otros casos de reinversión del “capital lavado”, supiera también que en ese caso concreto se trata de un “acto de despedida”, sin reinversión ulterior (igual tipicidad, de todos modos). Por otro lado, el argumento de que la persecución del lavado de dinero no sólo protege la administración de justicia, ni acaso persigue este bien en primer lugar (argumento del procurador general Becerra), también podría ser aplicado al encubrimiento simple: Aquel que en forma habitual da salida fácil a ladrones de autos en la adquisición del material robado, le presta un importante auxilio a la empresa delictiva respectiva, pues los autores saben que, en el futuro, podrán seguir confiando en la posibilidad de reducir su nuevo botín en dinero contante y sonante, al mismo tiempo, rein-

vertirán posiblemente una parte de lo recaudado a una mejor organización delictiva. Dicho a modo de ejemplo y parafraseando al procurador Becerra, si se persiguiera de modo eficaz a quienes compran a bajo precio automóviles robados, también se daría un duro golpe financiero al robo de automotores.

Con todo, en el primer argumento subyace la premisa correcta de que, básicamente, en el lavado suele haber *por detrás* una "empresa criminal" —el llamado "crimen organizado"—, el cual, con frecuencia, tendrá además las condiciones del delito de asociación ilícita, por más que en el despacho no se exija esta cualidad, necesariamente, como *elemento del tipo*. Estas razones y el hecho de que en muy diversos países de nuestro contexto cultural esta incriminación se haya impuesto ampliamente, incluso configurándola de modo más independiente del delito de encubrimiento (España) o más o menos cercano a él (Alemania) hace preferible que, por el momento, la Argentina cuente con una regulación de lavado que, al menos en el plano del "derecho penal simbólico", pueda ubicar al país en el ámbito de los que *no son proclives* al lavado de dinero. Este "símbolo" se logra más fuertemente, sin duda, con una figura particular, por más que ella siga constituyendo, sin más ni más —al igual que siempre— una forma de encubrimiento (ayudar a hacer desaparecer los rastros del delito o asegurar su provecho, arg. artículo 277, inciso 2, Código Penal).

II. La regulación en particular en materia penal

1. Generalidades

En el Código Penal vigente, el delito de encubrimiento está regulado en tres disposiciones, a saber: los artículos 277, 278 y 279.

El artículo 277 regula los tipos penales generales del delito.

El artículo 278 incluye una forma particular de receptación, cuya naturaleza ha sido controvertida: el encubrimiento en el que el autor recibe cosas o efectos que, "de acuerdo con las circunstancias [...] *debía sospechar* provenientes de un delito". Esta formulación puede hacer pensar en que se exigiría en ese precepto (artículo 278) un *dolo eventual*, mientras que las formas del artículo 277 serían de *dolo directo*, o, mejor, un actuar con conciencia segura ("de consecuencias necesarias": "...sabía..." [etcétera]). Pero también es factible pensar que no sólo el dolo eventual, sino también la mera imprudencia, o al menos una imprudencia grave, fuera suficiente para la punición. Puesto que el artículo 278 sólo exige: "...debía sospechar"; con lo cual, ni siquiera hace falta que el autor sospeche *efectivamente* del posible origen ilícito de la cosa receptada. Más el hecho de que, así interpretado, el delito de receptación culpable tendría —a juzgar por la escala penal— *prácticamente el mismo disvalor de acción* que el homicidio culpable hace pensar en que sería más razonable entender restringida la aplicación de la disposición a los casos en que el tribunal de juicio llega a la certeza de que el autor se representó, efectivamente, la *posibilidad de un origen ilícito* de los

efectos recibidos. En cualquier caso, el dictamen de mayoría parte de la base de que esta figura puede ser *suprimida*, si al mismo tiempo se suprime, del artículo 277, inciso 3, la exigencia de *consciencia segura* y se deja lisa y llanamente una sola figura como forma general, siempre satisfecha con "dolo simple", es decir, "eventual". A esta consecuencia se llega suprimiendo el "...sabía...", del inciso 3 del artículo 277. Por lo demás, los incisos 1 y 2 del mismo artículo no requieren ninguna forma particular de dolo, de modo que por esta vía se lograría una forma homogénea de encubrimiento doloso y se suprimiría la posibilidad de interpretar como punible la receptación imprudente (no dolosa).

Por último, el artículo 279 contiene una excusa absoluta particular para los parientes y otros allegados de la persona encubierta. El despacho incorpora esta excusa absoluta al artículo 277 (inciso 3) y deja libre, por tanto, los artículos 278 y 279 para completar la regulación punitiva del proyecto con las disposiciones circunscriptas al "lavado de dinero" (artículo 278) y las que rigen por igual a ambas formas (encubrimiento y lavado), como "disposiciones comunes" (artículo 279).

2. El delito de encubrimiento (artículo 277 Despacho [artículo 2])

A) Los textos

Repárese ahora en el artículo 277 del Código Penal vigente, para compararlo luego con el artículo 277, incisos 1 y 2, PA.

Artículo 277, Código Penal vigente: "Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, algunos de los hechos siguientes:

"1) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo;

"2) Procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a asegurar el producto o el provecho del mismo;

"3) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o intervinere en su adquisición, recepción u ocultamiento, con fin de lucro. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual la pena se elevará al doble".

Véase ahora el texto propuesto:

Artículo 277, PA: "1) Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

"a) Ayudare a un sujeto eventualmente responsable a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta;

"b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al responsable a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer;

"c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito;

"d) No denunciare la perpetración de un delito o la individualización del responsable de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole;

"e) Asegurare o ayudare al responsable u asegurar el producto o provecho del delito.

"2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:

"a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión;

"b) El autor actuare con ánimo de lucro;

"c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.

"La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo se operará una vez, aun cuando concurren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena".

B) La forma básica de encubrimiento (artículo 277, inciso 1, PA)

La parte liminar del inciso 1 se corresponde, sin modificaciones sustanciales, a la parte liminar del artículo 277, Código Penal vigente. La expresión "sin promesa anterior al delito" es sustituida por la de "delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado". La razón de este cambio reside en que es una formulación más general y correcta. Lo relevante es que el encubridor haya sido *ajeno a la comisión del delito precedente*, porque el autoencubrimiento es impune. La expresión "sin promesa anterior", de la ley vigente, no es totalmente clara, porque un coautor podría encubrir a su coejecutor, sin haberle prometido antes ese acto de encubrimiento, y, sin embargo, no es un encubridor, justamente por haber *intervenido* en el hecho; de allí la fórmula del proyecto: "en el que no hubiera participado". La otra expresión, "después de su ejecución" es sustituida por "tras la comisión de un delito..."; ambos giros son equivalentes.

El inciso 1, subinciso a, el dictamen de mayoría, separa de la prescripción la parte omisiva de la figura, a la que le reserva el subinciso d. En lo demás, el inciso 1, subinciso a, de este dictamen, es equivalente, en lo sustancial, al inciso 1, Código Penal vigente.

El inciso 1, subinciso b, del dictamen, se corresponde parcialmente con el inciso 2, Código Penal vigente. Los cambios consisten en: por un lado, se separa en dos periodos el "ocultar (por sí mismo)" (o hacer desaparecer los rastros, etcétera) del "ayudar a ocultar" (o hacer desaparecer... etcétera); por otro, se quita de allí el "asegurar los resultados o provecho del delito" para configurar con esta acción un subinciso autónomo (inciso 1, subinciso e). Cuando, tanto en este subinciso b, como en el a, se dice "ayudar al responsable" (o "al eventualmente responsable"), esto se debe a que si la ayuda es a un tercero que tampoco

participó en el hecho, este tercero será "autor de encubrimiento" y su ayudante será "partícipe de encubrimiento" (como cómplice), según las reglas de la parte general. No hace falta, pues (o más bien es nocivo) incorporar un "ayudar a ocultar", cuando no se ayuda al responsable sino a un tercero; en cambio, si es preciso incluir como una acción típica de "encubrimiento" la ayuda al responsable, precisamente por la impunidad del autoencubrimiento: dado que el hecho principal es impune por razones que atañen personalmente al responsable del hecho previo, la ayuda a él será punible como encubrimiento en forma autónoma.

El inciso 1, subinciso c, se corresponde con el inciso 3, de "receptación". Se quita la exigencia de "sabía..." (provenientes de un delito), por considerarse que basta con el *dolo eventual*, lo cual exigirá al menos el conocimiento de la probabilidad, sobre la base de datos serios. Esto se sigue de la aplicación de reglas generales y se corresponde también con la supresión de la forma que anida en el vigente artículo 278, que tiene en ciernes el riesgo de una responsabilidad por imprudencia que iría, para el mero encubrimiento, demasiado lejos. Tampoco se exige, en la receptación, el "ánimo de lucro", en primer lugar, porque toda receptación de una cosa es en sí encubrimiento al menos en la forma de una ayuda a ocultar o a hacer desaparecer los rastros del delito. Quien le compra a un ladrón un cuadro sólo para "hacerle un favor", con la idea de regalar el cuadro más tarde, porque no le gusta, actúa sin "ánimo de lucro", pero *encubre de todos modos*. El ánimo de lucro se reserva, en el inciso 2, PA, como elemento subjetivo especial que produce una calificación, *junto a la habitualidad*. Esto sí implica un cambio relativamente sustancial en la configuración del delito de receptación, porque en el texto actual la receptación sin ánimo de lucro, si no significa a la vez ayudar a ocultar o hacer desaparecer los rastros, queda impune. El despacho parte de la base de que la cosa que ya en su configuración exterior, como estereotipo, aparece como el derivado de un delito, no puede ser recibida por nadie. Y que el eventual ánimo de lucro del receptor —generalmente existente— transforma a la receptación en un hecho más grave, del mismo modo que el ayudar a ocultarse con ánimo de lucro también sería en la propuesta del PA, más grave (véase el artículo 277, inciso 2, PA). En este subinciso c, con todo, se ha suprimido una parte que rige en el correspondiente artículo 277, Código Penal vigente, a saber, el agregado: "...o interviniera en su adquisición, recepción u ocultamiento". Esta supresión se debe a que el receptor es aquí siempre un extraño (si fuera otro responsable se trataría de la hipótesis de "asegurar el provecho del delito"); pero ayudar a quien es extraño al hecho previo a que adquiriera la cosa proveniente del delito es un acto de complicidad en el encubrimiento cometido por éste, para lo cual bastarán, de nuevo, las reglas generales de la participación (artículos 45, 46, Código Penal).

El inciso 1, subinciso d, se corresponde con la última parte del inciso 1 del artículo 277 vigente: "...u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo".

Pero, como se ve, se cambia bastante su redacción. Ello así, porque no se trata sólo de "omitir denunciar el hecho", sino también de la omisión de anotar de cualquier dato que sirva para la adscripción de responsabilidad penal, es decir: no sólo la perpetración del hecho en sí, sino también la individualización del responsable de un delito ya conocido por la autoridad.

El inciso 1, subinciso e, se corresponde con el artículo 277, inciso 2, *in fine*, Código Penal vigente. Sólo se agrega, también aquí, para la acción que consiste no en "asegurar", sino en "ayudar a asegurar", el requisito de que el receptor de la ayuda sea un sujeto responsable (cuyo autoencubrimiento es impune). Si se ayuda a un tercero a que éste asegure el provecho de los responsables de un delito cometido por otro, entonces habrá nuevamente *complicidad en el encubrimiento cometido por este tercero*.

C) *La forma agravada de encubrimiento*
(artículo 277, inciso 2, del dictamen)

El inciso 2 incorpora las siguientes novedades:

a) El ánimo de lucro, en lugar de ser elemento tipificante de la figura básica de la receptación, como en el artículo 277, inciso 3, Código Penal vigente, se transforma en causal general de agravación y califica, por tanto, todas las formas de encubrimiento del artículo 277, inciso 1, del dictamen.

b) Pero, además, incorpora también la especial novedad de que el encubrimiento se torna, asimismo, en "calificado", cuando el hecho precedente fuese un delito *especialmente grave*. La determinación del delito especialmente grave se hace mediante la exigencia de que la escala penal del delito precedente tenga un mínimo superior a tres años de prisión. La razón por la cual el tipo calificado viene definido por la mención "delito especialmente grave" y recién luego se ofrece una determinación del delito grave por medio de la escala penal, reside en que si el texto se remitiera directamente a la escala penal, se podría sostener que el dolo del encubridor, en razón de tener que referirse a *todos los elementos del tipo*, tuviese que alcanzar al conocimiento efectivo y actual de que el hecho precedente tiene tal o cual escala penal en la ley. La redacción que se propone, en cambio, fortalecería la idea de que baste con que el encubridor conozca la "base fáctica" del hecho precedente, sepa además que tal hecho constituye delito y sea consciente también de que, en general, es un hecho especialmente grave para la ley y la sociedad. El error acerca de la medida del mínimo penal o el carecer de toda idea al respecto sería error o ignorancia de subsunción, no excluyentes del dolo.

c) Por último, la agravante de "habitualidad", que en el derecho vigente lo es exclusivamente para la forma de "receptación", en el dictamen pasa a ser una agravante genérica del encubrimiento, al igual que el ánimo de lucro. Normalmente, "habitualidad" y "ánimo de lucro" irán unidos, porque es difícilmente imaginable la habitualidad en el auxilio a hacer desaparecer los rastros del delito, asegurar sus resultados o comprar los efectos robados, si no fuera porque para el encubridor es una

forma de sustento económico. Pero, normativamente, bastarían o bien la mera habitualidad, o bien el mero ánimo de lucro —aunque el hecho encubierto no fuera "especialmente grave"—, para que rija la agravante del artículo 277, inciso 2, PA.

La escala penal prevista para el encubrimiento agravado es del doble del encubrimiento simple, es decir, un año a seis años de prisión. Esta escala coincide con la del actual artículo 277, inciso 3, última oración (habitualidad en la receptación), que ahora quedaría generalizada para toda forma de encubrimiento en que concurrieran las mentadas causales de agravación. El texto del inciso 2 aclara expresamente que la acumulación de causales de agravación no produce una multiplicación de la agravación del marco penal, sino que éste se duplica sólo una vez, y la eventual concurrencia de otras causales pueden incidir tan sólo en el ámbito de la medición de la pena.

D) *La excusa absolutoria por relaciones personales*
(artículo 277, inciso 3, del dictamen)

El inciso 3 del artículo 277, PA, regula la tradicional excusa absolutoria prevista para parientes y personas estrechamente vinculadas al sujeto beneficiado por el encubrimiento. Sólo se reforma ligeramente la redacción, pero los casos excluidos de la punibilidad son exactamente los mismos que en el artículo 279, Código Penal vigente.

Que esto es así surge de una rápida comparación de los textos.

El artículo 279, Código Penal vigente, reza así:

Artículo 279, Código Penal vigente: "Están exentos de pena los que hubieren ejecutado un hecho de los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 277 a favor del cónyuge, de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo íntimo o de una persona a la que debiesen especial gratitud.

"La exención de pena a que se refiere el párrafo anterior no se aplicará al que haya ayudado a asegurar el producto o el provecho del delito o al que haya obrado por precio."

El texto del dictamen lo dice así:

Artículo 277, inciso 3: "(3) Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e, y del inciso 2, b".

Como se ve, en el texto vigente (artículo 279, Código Penal) no está cubierto por la eximente, de por sí, el que comete receptación con ánimo de lucro, lisa y llanamente porque el delito descrito en el artículo 277, inciso 3, *no está incluido* entre los que admiten la excusa. Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 279, Código Penal vigente, excluye la excusa también para quien ayuda a asegurar el provecho o actúa por precio.

El despacho logra estos efectos por vía de excluir en la eximente los casos del artículo 277, inciso 1, subinciso *a* ("asegurar o ayudar al responsable a asegurar el producto o provecho del delito") y del artículo 277, inciso 2, subinciso *b* ("el autor actuare con ánimo de lucro"). No se debe ver nada extraño en el hecho de que de esta forma queden impunes por la excusa absolutoria ciertos encubrimientos agravados (artículo 277, inciso 2, *a* y *c*) y no queden impunes otros menos graves (artículo 277, inciso 1, *a*). La excusa absolutoria no está prevista en función de la *gravidad del hecho*, sino en la de la estrecha relación entre un sujeto que encubre y el sujeto encubierto, mientras el primero no se beneficia especialmente de ello, ni esté "terminando" de asegurar los efectos ulteriores del delito cometido por el autor o partícipe del hecho precedente.

En orden a la redacción de la excusa absolutoria, se ha empleado la fórmula "exentos de responsabilidad criminal", para mantener el paralelo del instituto similar de la impunidad del hurto y defraudaciones entre parientes, del artículo 185, Código Penal.

3. El delito de lavado de dinero o bienes (artículo 278 del dictamen [artículo 3º])

El artículo 278 del despacho de comisión contiene las regulaciones principales en orden a la figura de "lavado de dinero", que era la preocupación originaria de la redacción del proyecto. Ya fueron dadas las razones por las que el texto propuesto por la mayoría de la comisión intentó una "regulación combinada" entre encubrimiento y lavado (que también es una forma de encubrimiento). Otras peculiaridades serán explicadas aquí.

A) La figura básica dolosa (artículo 278, inciso 1, del dictamen de mayoría)

Atiéndase primeramente al texto proyectado para la figura básica dolosa:

Artículo 278, inciso 1: "1) Será reprimido con prisión de dos a diez años el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquirieran, la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Si el valor de los bienes no superare la suma indicada, el autor será reprimido conforme a las reglas del artículo 277".

a) Enunciación de verbos típicos y definición genérica. Para la tipicidad, es decir, para la descripción de la conducta prohibida por la norma, se ha apelado a un criterio que combina el empleo de algunos verbos característicos, con una fórmula residual, que intenta dar un concepto general de en qué consiste el hecho del "lavado de dinero o bienes". Se trata, pues, de un procedimiento similar al de la descripción legal del delito de estafa, ya que el artículo 172, Código Penal, contiene también una serie de modalidades de la acción de defraudar ("con nombre supuesto", "calidad simu-

lada", "falsos títulos", etcétera), para cerrar la descripción con una definición genérica: "...o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño". Esto tiene una función múltiple: tanto abarcar con claridad algunos casos frecuentes, como el dar un concepto que sirva para alcanzar a otros casos, cuanto, por último, precisar también qué requisitos tiene que tener un hecho, *incluso cuando el autor realice uno de los verbos especialmente mencionados*, para que la acción sea realmente típica.

Para la selección de los verbos típicos se ha seguido, por un lado, la mención de los que contiene el artículo 25 de la Ley de Estupefacentes, y, por otro, la de algunos de los proyectos en consideración ante la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados. Así, quedan alcanzadas especialmente las acciones de "convertir", "transferir", "administrar", "vender", "gravar"... ciertos objetos; estos objetos son los que hacen que tales acciones sean adecuadas al tipo penal y son: "...el dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito".

Pero esta enumeración recién se torna clara como vehículo para la incriminación, cuando se llega a la *definición genérica* de lo que el despacho de comisión entiende por "lavado de dinero o bienes". Es una opinión corriente la que dice que la doctrina no ha hallado aún una definición cerrada y convincente de la conducta que realmente se quiere perseguir con esta incriminación. Sin embargo, si el legislador no intenta una circunscripción clara, sólo por el hecho de que la doctrina no puede auxiliarlo, no observará el mandato a él dirigido de que la ley describa concretamente lo que se quiere castigar, sin buscar fórmulas más abiertas que "faciliten la labor de condenar". El mandato de certeza o de determinación (*lex certa*), insito en el principio de legalidad (*nullum crimen sine lege*) hacen necesario un intento de definición.

La definición dada por el dictamen de mayoría pretende captar justamente aquello que es denominado por la expresión "lavado (de dinero o bienes)". La expresión, proveniente de otros idiomas, apunta al hecho de que en la operación de lavado un cliente llega con "dinero sucio" a un banco u otro organismo apto para el lavado, y sale de allí con los "bienes limpios"; del mismo modo que el cliente de una lavandería de barrio llega con su ropa sucia y se la lleva limpia. La expresión "lavado" puede parecer poco elegante, mucho más así la de "dinero sucio", pero es altamente ilustrativa y certera. No es bien precisa, en cambio, la de "legitimación de activos"—también usada en algunos proyectos—, porque con el acto de lavado los bienes no quedan "legitimados"; estrictamente, siguen siendo tan ilegítimos como antes de la operación; sólo salen "limpios" en el sentido de que *los demás pueden no advertir el origen "maculado" de los bienes*. Se trata de una limpieza externa, aparente, al igual que en el encubrimiento en general se puede borrar los rastros del delito, pero no lograr que los bienes resultantes sean lícitos o el hecho delictivo se tenga por no cometido. "Legitimar", en cambio, es un verbo de una connotación muy precisa en el uso jurídico general: mediante un acto de legitimación, lo legitimado pasa a ser *legítimo*; con el "lavado", no.

En definitiva, la definición reza: "...o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes

provenientes de un delito..., con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran, para su tenedor, la apariencia de un origen lícito".

b) *El objeto sobre el que recae la acción.* Al decir "los bienes originarios o los subrogantes" el texto da a entender que es indiferente que la operación de lavado realice sobre la cosa directamente derivada del delito o sobre los bienes que hubieran entrado en el patrimonio en el lugar de la cosa originaria. Al mismo tiempo, también es indiferente que la operación de lavado permita al inversor llevar a la misma cosa que él "pone a lavar" u otra que la subroga, etcétera (ejemplo, una operación de cambio, de una moneda a otra).

c) *No se exige un dolo directo.* Por otro lado, se advertirá que la redacción no utiliza la preposición: "para...", ni la expresión: "con el fin de..." ("que los bienes originarios o los subrogantes adquieran... etcétera"); sino que dice simplemente: "con la consecuencia posible de que... etcétera".

Esto tiene la siguiente explicación. Si se dice "con el fin de..." o "para...", etcétera, a primera vista se entiende mejor, porque la expresión es más semejante a la del lenguaje natural, a la forma en que se expresaría el "hombre de la calle"; pero ambas expresiones generan dificultades dogmáticas importantes.

Porque el uso frecuente de estos giros en los tipos penales es una firma abreviada de mencionar que lo que "tiene" la norma (el legislador) es que termine ocurriendo justamente eso (en el caso, la apariencia de licitud, la posibilidad de reinserción de los bienes en un circuito económico delictivo, etcétera). Pero en cuanto se usa la fórmula "con el fin de..." o "para", dogmáticamente se reviste al hecho de necesitado de un "dolo directo". Ahora, en muchos casos al "lavandero" le resultará indiferente si la operación le servirá al delincuente para darle a sus bienes apariencia lícita, o no, por tanto, en este sentido no actuará con "dolo directo de primer grado" ("con intención"); pero sí sabrá que puede ser que, como consecuencia de la operación, los bienes ilícitos adquieran un carácter aparentemente puro. Sin embargo, para la tipicidad basta con que el autor sea consciente de que, como consecuencia de la operación que realiza, puede transmitirse a los bienes de origen delictivo una apariencia lícita (es irrelevante que ésta sea precisamente su intención). En esta medida, entonces, basta con el mero dolo eventual, en tanto los datos a partir de los cuales el autor extrae la convicción de la posibilidad sean serios.

d) *Ser ajeno al hecho precedente.* Además, la descripción tiene el componente negativo de "no haber participado" (en el delito precedente), porque, entonces, si el sujeto participó en el hecho previo, la operación es, para quien la realiza, un mero "acto posterior co-penado" en el disvalor del hecho previo. Esto significa que en la escala penal de todo delito de enriquecimiento patrimonial se tiene en cuenta que el autor del hecho lucrará con los bienes, o los pondrá en su circuito comercial. No tendría sentido aplicarle otra pena

por "lavar el botín", porque esto está presupuesto en la comisión del hecho previo. De allí que el autor de lavado debe no ser responsable del delito anterior. El elemento es paralelo al de "no haber participado" que también existe en el delito de simple encubrimiento. Dicho brevemente: el autoencubrimiento es impune (o en todo caso está co-penado con la pena del hecho precedente).

Por ende, si, por ejemplo, el hecho previo está prescripto, la operación de lavado es impune para el antiguo ejecutor o partícipe. Ciertamente se podría llegar a la solución contraria, a quitar este elemento de la redacción del tipo, y penar por igual a ejecutores o extraños². Pero eso podría llevar a soluciones injustas cuando el ejecutor del hecho previo es realmente penado por el delito precedente, porque en la escala penal de ese delito ya está considerado por el legislador que la cosa desaparece para siempre del ámbito en el que estaba, y que pasa a otro ámbito, generalmente con el fin de que entre en el circuito económico propio del patrimonio del autor del delito, lo cual ocurre, normalmente, después de que la cosa ha sido "lavada". El despacho de comisión mantiene, pues, el requisito negativo: el autor del delito de lavado tiene que ser ajeno al hecho previo.

e) *El límite dinerario.* Buena parte de las legislaciones circunscriben la punición del delito de lavado de dinero al caso de que el delito precedente se halle dentro de una enumeración más o menos extensa, pero, en cualquier caso, cerrada (tráfico de estupefacientes, contrabando de armas, delincuencia organizada, etcétera).

Ciertamente se podría seguir este camino, tal como lo proponen algunos de los proyectos de los señores diputados. Pero, en nuestra opinión, ahora, es preferible una vía distinta.

El fenómeno del lavado de dinero, como especialmente intrigante para el derecho penal, comenzó en el campo del tráfico de estupefacientes, para identificar a los autores de los hechos previos. Luego se vio que el fenómeno podía extenderse a otros campos. Pero si se hace una enumeración, necesariamente se pecará de poco, porque es imposible prever todos los hechos previos que podrían originar lucro y que estuvieran en un plano de igualdad o proporcionalidad en el grado de disvalor. Por otra parte, si se hace una enumeración bien extensa, se incluirán casos que quizá no deberían estar en esta disposición particular y se excluirán otros que sí tendrían que estar incluidos.

² En Alemania, la reciente Ley para el Mejoramiento de la Lucha contra la Criminalidad Organizada, del 5/6 de marzo de 1998, ha suprimido de la descripción legal del parágrafo 261 StGB (Código Penal alemán) el requisito de que el hecho antijurídico previo hubiera sido cometido "por otro", de tal modo que eventualmente también puede ser penado por "lavado de dinero" aquel que hubiera participado, o *podido* participar (en los casos de duda probatoria sobre el hecho previo, pero con claridad sobre el hecho del lavado en sí), en el hecho delictivo anterior.

En la práctica, se podría llegar a establecer el escalón de pertenencia propio del subconjunto "lavado" (dentro del conjunto mayor de "encubrimiento"), fijando un monto del valor de los bienes que reciben apariencia lícita por encima del cual el hecho constituya "lavado" en sentido estricto, y hasta el cual, en cambio, sea un mero "encubrimiento", en el sentido del artículo 277. Porque los delitos que están en el centro de la atención, sea como fuere, son delitos que originan enormes ganancias, de manera que el exigir un monto mínimo ya selecciona de por sí, por vía indirecta, los delitos que realmente interesan. Por otra parte, el valor patrimonial pone en un pie de igualdad las muy variadas formas delictivas que podrían conducir a la posterior operación de lavado.

Por estas consideraciones, el despacho no hace ninguna enumeración, sino que queda incluido como "hecho precedente" cualquier delito que sea, mientras el valor de los bienes supere la suma de cincuenta mil pesos (\$ 50.000). Si el valor de los bienes no supera ese límite, el hecho es punible conforme a las reglas del artículo 277.

Pero el fijar un valor como límite del "tipo objetivo" podría conducir a que las operaciones sean ficticiamente fraccionadas de modo que nunca caigan dentro del tipo. Para evitar este efecto, el dictamen prevé que el límite quede superado tanto si el valor excede de la cantidad indicada en un solo acto, o por la reiteración de hechos diversos, mientras éstos estén vinculados de algún modo entre sí. Esta última aclaración significa lo siguiente: si un sujeto se dedica a "lavar" dinero proveniente de delitos y realiza una operación en favor de Cayo y otra en favor de Ticio, sin que ninguno de estos personajes tenga relación con el otro, las dos operaciones no deben ser sumadas; por tanto, si el valor de los bienes de cada operación asciende a \$ 40.000, el autor responde por "encubrimiento simple". Pero si Cayo y Ticio pertenecen a la misma organización criminal o cometieron juntos un asalto, etcétera, entonces, las operaciones se computan en conjunto: hay lavado, y no mero encubrimiento.

B) La figura imprudente (artículo 278, inciso 2, PA)

El artículo 278, inciso 2, propuesto en el dictamen, incorpora la incriminación de la forma imprudente de este delito, del siguiente modo:

Artículo 278, inciso 2: "2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito."

En ocasión de la exposición formulada por el procurador general Becerra sobre cuestiones atinentes al tema, en particular, sus reflexiones sobre algunos de los proyectos, atacó él la intención de incluir formas culposas de este delito, cuando lo tradicional en el código argentino ha sido siempre limitar las formas imprudentes a la protección de la vida y otros valores fundamentales.

La tendencia internacional, sin embargo, transita el otro camino. Ciertamente es que esto no constituye ningún argumento, dado que en esta materia ha habido corrientes y contracorrientes internacionales originadas en fuertes presiones que no surgen del seno de los propios pueblos cuyas legislaciones se vienen reformando, año tras año, en materia de "lavado", sino que son impuestas, por así decirlo, "desde afuera". Por otra parte, en favor de la posición del procurador general habla también el hecho de que la punición de la imprudencia podría encubrir, en la práctica, la necesidad de aplicar una pena en los casos en que, por dificultades probatorias, tuviera que quedar impune un hecho doloso, cuando no fuese claro el conocimiento del autor del origen ilícito de los bienes. Esta forma material de violar el principio de inocencia podría abogar en favor de no incluir esta figura³.

Ello empero, en el derecho penal actual el delito imprudente no ocupa la forma residual y excepcional con la que se lo veía hace 50 o 100 años. La "imprudencia" es hoy el centro de la teoría de la imputación. Incluso es frecuente que se vea a la imprudencia como la forma más genérica de ilícito penal, y ser el dolo, tan sólo, una forma calificada de imprudencia (el dolo como lo más imprudente que pueda haber). Esto se corresponde con la definición teórica actual de todo ilícito penal como la creación de un riesgo reprobado. El hecho de que en todo delito imprudente se pueda ver, de nuevo, un componente doloso (dolo de peligro abstracto) no cambia en nada la circunstancia de que la dogmática del delito imprudente es hoy la abanderada del hecho punible, del mismo modo que la tentativa (el disvalor de la acción) ha desplazado al concepto consumación como el principio rector de todas las reflexiones.

La inclusión de una forma imprudente, de todos modos, no puede depender del estado de la discusión

³ En uno de los comentarios más conocidos al Código Penal alemán (StGB, *Leipziger Kommentar Grosskommentar*), editado por Kurthard Jähnke, Heinrich Eilhelm Laufhütte y Walter Odersky —citado, en adelante: "LK", 11ª edición (1994)—, el comentarista Wolfgang Russ (a cargo del párrafo 261), dice lo siguiente: "La ampliación de la punibilidad a la ligereza [imprudencia grave] (respecto del desconocimiento del origen del objeto incriminado) sobre todo en los casos del párrafo 2, Nº 2, que, según su forma de aparición exterior no se presentan como formas de conducta reconocibles como criminales, puede conducir a dificultades para los empleados bancarios, en los negocios de dinero realizados por los bancos (cf. Löwe-Kruhl, wistra, 1993, pp. 123, 125). El legislador vio esta posibilidad, pero consideró necesaria la ampliación del tipo al ámbito de la ligereza, para evitar las dificultades probatorias que podrían aparecer y asegurar la efectiva lucha contra los casos de lavado de dinero (BT Drucks, 12/989, p. 27, además, Krey/Dierdamm, JR, 1992, pp. 353, 359; críticamente al respecto también Lampe, JZ, 1994, pp. 123, 129)" ("LK", 11ª ed., coment. párrafo 261, Nº marg. 18).

teórica, sino de razones prácticas. Ocurre que en la política criminal del último tiempo, la inclusión de figuras imprudentes se ha expandido en muy diversas direcciones y, con frecuencia, incluso sin que el marco penal registre un desnivel demasiado pronunciado respecto del correspondiente hecho doloso. El dictamen de mayoría parte de la base, en fin, de la conveniencia de incluir esta forma de delito imprudente, pero limita la punición a los casos en que se trate de una "imprudencia grave" ("temeridad", en la terminología española), como acogimiento de la antigua máxima: *culpa lata dolo comparabitur*.

Por otro lado, el dictamen prevé sólo pena de multa, bien que, según sea el valor de la operación, puede llegar a ser una multa importante: 20 al 60 % del valor de los bienes. Para escoger esa escala penal, se ha partido de la relativa identidad entre este delito y el peculado imprudente cometido por funcionario público, del artículo 262, Código Penal: "...el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, diere ocasión a que se efectuase por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior".

Para la forma culposa del lavado, circumscripita siempre a la temeridad o imprudencia grave, rigen los demás elementos del tipo que configuran el hecho doloso del artículo 278, inciso 1, especialmente en orden al límite del valor de los bienes, de \$ 50.000.

La figura imprudente no es extensible al mero encubrimiento, en el que la incriminación sigue siendo sólo para el hecho doloso (e incluso, desapareciendo la ambigua forma del actual artículo 278, Código Penal vigente —"debiendo saber..."—). De allí que el inciso 2 se remita al inciso 1, "primera oración" (pues la segunda oración remite al artículo 277 el caso en que el lavado no supera la suma límite).

Se acota aquí que la tipicidad de la forma imprudente existe también en el Código Penal español⁴ y en el Código Penal alemán⁵, en ambos casos circunscribiendo la responsabilidad por imprudencia a la existencia de culpa grave.

⁴ Dice el artículo 301, inciso 3, Código Penal: "Si los hechos se realizan por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo". Se ve aquí que la escala penal es sensiblemente más leve que la del hecho doloso, respecto de la pena de prisión, pero idéntica en la pena de multa.

⁵ Dice el parágrafo 261, párrafo 5, StGB: "Quien en los casos de los párrafos 1 o 2, no reconoce por imprudencia grave que el objeto procede de un hecho antijurídico mencionado en el párrafo 1, será penado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con pena de multa". Aquí se traduce como "imprudencia grave" el adverbio *leichtfertig* (literalmente: por ligereza). Esta "ligereza" suena algo débil en castellano, pero significa que el acto es realizado de modo desaprensivo, por descuido grave.

C) La "receptación intermedia" o "en tránsito" (artículo 278, inciso 3, del dictamen de mayoría)

El artículo 279, inciso 3, propuesto, se refiere al caso de que el autor del hecho sea sorprendido en el paso intermedio entre la entrega de los bienes por parte del ejecutor y la entrega que ese receptor habría hecho después, de no haber sido descubierto, ante el organismo o persona que pudiera realizar la operación lavadora. El texto dice así:

Artículo 278, inciso 3: "(3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277".

Técnicamente, se trata de lo que se denomina "delito de emprendimiento", es decir, de una forma de incriminación de conducta que materialmente es un "acto preparatorio" del hecho futuro (el lavado), pero que el legislador trata, formalmente, ya como hecho consumado. El tratamiento propuesto es el de remitir el caso a las reglas del artículo 277, de tal modo que el "receptor intermedio" comete simple encubrimiento. Es una forma simple de darle al hecho que se halla en preparación el tratamiento que merece, pues es valorativamente comparable a "...ayudar al responsable a asegurar el producto o provecho del delito", en el sentido del artículo 277, inciso 1, e, de este dictamen.

4. Disposiciones comunes (artículo 279 del dictamen de mayoría, artículo 4)

El artículo 279 propuesto prevé diferentes reglas que se aplicarían por igual tanto al encubrimiento simple (artículo 277 del dictamen) como al lavado (artículo 278 del dictamen). Estas reglas deben ser explicadas separadamente, porque no guardan una relación sistemática entre sí, que no sea el mero hecho de ser aplicables por igual a "ambas formas de encubrimiento".

A) La limitación de la escala penal según la gravedad de la escala del hecho precedente (artículo 279, inciso 1, del dictamen)

En la legislación alemana y española rige expresamente, para el delito de encubrimiento —pero no para el delito de lavado de dinero—, una regla que limita las consecuencias jurídicas del hecho de encubrir según sea la gravedad del hecho previo. Dice, en efecto, el parágrafo 258 StGB —que regula en general el delito de encubrimiento ("frustración de pena")—, en su párrafo 3: "La pena no puede ser más grave que la pena con la que está amenazando el hecho previo"; y lo correspondiente dice el artículo 452, primera parte, Código Penal español: "En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto".

Esta disposición —como se acaba de adelantar— no está incluida, de modo correspondiente, en la regulación del delito de lavado de dinero (parágrafo 261

StGB; artículo 301, Código Penal español). Esto hace pensar que un hecho de lavado de dinero podría ser penado con mayor intensidad que el hecho precedente, en sí mismo.

Pero esta apariencia puede ser engañosa. Las legislaciones referidas parten de la base de incriminar el lavado de dinero respecto de bienes que provienen de delitos graves, sea por medio de una referencia a los "crímenes" (delitos graves), a lo que se suma una enumeración en particular, como en Alemania⁶, sea por medio de una mera referencia a los "delitos graves", con una agravación en particular respecto de ciertos delitos previos, como en España⁷, con lo cual, en principio, no se daría la anomalía de que quien "lava" el botín sea penado más gravemente que el que "lo obtiene".

Ello podría hablar en favor de incluir también en la ley argentina un catálogo de delitos, que puedan valer como exclusivos en carácter de "hecho previo" para el delito de lavado del producto económico proveniente de tales delitos.

A este respecto habría que distinguir claramente entre dos cuestiones:

a) Si realmente es conveniente una limitación de la pena por delito de lavado, según sea la gravedad del delito precedente;

b) Si, en caso de una respuesta afirmativa, habría que lograr ese objetivo por medio de una restricción típica respecto de los hechos que puedan operar como "hechos previos" o por una regla explícita de limitación del marco penal.

⁶ Parágrafo 261, párrafo 2: "1) los crímenes, 2) los delitos del parágrafo 29, párrafo 1, oración 1ª, Nº 1, de la Ley de Estupefacientes, o del parágrafo 29, párrafo 1, Nº 1, de la Ley de Control de Sustancias Básicas, 3) los delitos de los párrafos 246, 263, 264, 266, 267, 332, párrafo 1, también en relación con el párrafo 3, o del parágrafo 334, que hayan sido cometidos en forma habitual por el miembro de una banda que se ha formado para la comisión continuada de tales hechos, 4) los delitos cometidos por un miembro de una asociación ilícita".

Esta regulación acaba de ser reformada por la ley del 5/6 de marzo de 1998, conforme a la cual rige una enumeración aun más compleja. A los efectos de nuestra ilustración no es preciso la transcripción íntegra del texto actualmente vigente.

⁷ Artículo 301: 1) (primer párrafo): "El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar..." (etcétera). 1) (segundo párrafo) "Las penas se impondrán en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código (190)".

Sin encarar aquí un desarrollo exhaustivo de la cuestión, creemos que bastará con algunas reflexiones que muestren intuitivamente la necesidad de que el hecho previo opere como limitación. Si este punto está asegurado, después será sencillo expedirse en favor de que la limitación debe lograrse por medio de una regla explícita similar a la que requiere el delito de encubrimiento (y no por medio de una enumeración taxativa de los hechos que puedan valer como precedentes).

Plénesese en lo siguiente: varios proyectos de los señores diputados proponen a los delitos contra la administración pública como válidos "hechos precedentes" para dar lugar al delito de lavado. Ahora bien, la escala penal preponderante en los delitos contra la administración pública que pueden dar lugar a enriquecimiento tiene una escala penal que va de dos a seis años de prisión, mientras que la de los proyectos en consideración prevé, para el delito de lavado de dinero, una escala penal superior a ese marco. ¿Sería justo castigar más gravemente al gerente de un banco que permite distraer la atención de ingentes sumas de dinero depositadas por un funcionario público, que al propio funcionario público?

Cierto es que contra esa reflexión intuitiva se podrían oponer algunos argumentos.

El primero puede ser formulado así: en general, con el delito de lavado "se encubre" una serie de hechos previos *independientes* —cometidos, técnicamente, en "concurso real"—. Por tanto, normalmente el hecho posterior continúa el disvalor propio de una pluralidad de hechos, los cuales, si debieran imponer un límite, éste tendría que ser igual a la *sumatoria* de los marcos penales independientes (arg. artículo 55, Código Penal). Esto ocurriría con el ejemplo anterior de un funcionario que comete una pluralidad de actos de cohecho y luego lleva el botín a su agente lavador.

Pero este argumento es endeble. Así como es imaginable una pluralidad de hechos cuyo producto es lavado en un *acto único*, también es imaginable un delito único cuyo producto es lavado, para disimular el hecho de modo más eficiente, en varias secciones de *actos independientes*. Por lo demás, también es factible el hecho previo de un solo acto seguido de un solo hecho de lavado, al igual que una pluralidad seguida de otra pluralidad, etcétera. De esto, por ende, no se podría derivar ningún argumento.

Desde otro punto de vista se podría argumentar que —en lugar del grave marco penal de un mínimo de dos años de prisión y un máximo de diez, como aquí se prevé siguiendo al artículo 25 de la Ley de Estupefacientes— sería mejor proponer un marco reducido para el delito de lavado *hasta que no haya ningún hecho previo* con escala penal mayor a aquél, de entre la serie de hechos previos seleccionados en el tipo penal.

Lo cierto es que, en cualquier caso, la limitación por el disvalor de acción del hecho previo es *justa*, y, por otro lado, la esperanza de una enumeración taxativa de hechos previos, cuyas escalas particulares nunca superaran a la del lavado, se vería frustrada fácilmente, si se piensa la frecuencia con que el derecho penal es usado en la política argentina, siguiendo el pulso de

unos medios de prensa poco informados, como moneda de cambio de estrategias electoralistas⁸. El recurso constante al "derecho penal simbólico" hace temer que una enumeración taxativa que rigiera hoy, fuese cambiada muy pronto por otra más amplia, y por otra, etcétera, sin que la limitación de la pena por medio de la enumeración legal de determinados hechos previos sea un camino seguro ni siquiera a corto plazo. Tampoco se puede argumentar sobre la base de la pretendida "autonomía" del delito de lavado de dinero. El lavado de dinero no es ni más ni menos autónomo que el delito de encubrimiento. Por lo demás, la "autonomía" es aquí un factor *débil*, que sólo indica que el ilícito de cada autor de lavado (y de encubrimiento) no está regido por el principio de accesoriedad del hecho principal, como así lo está —según la opinión dominante— la teoría de la participación criminal. Pero, ni la teoría de la participación tiene que ser explicada necesariamente conforme al principio de accesoriedad, ni el delito de encubrimiento es totalmente autónomo. Lo primero es una compleja cuestión teórico-dogmática que no hace falta tratar aquí⁹. Lo segundo se explica así: la necesidad de un hecho previo de carácter delictivo es tan elemento del tipo del delito de la vado (y de encubrimiento) como lo es la acción típica misma que encubre el hecho precedente (receptar la cosa, disimular su origen, etcétera). En esta medida, ni el lavado ni el encubrimiento son autónomos, dependen (penden de) un hecho ilícito previo de determinadas características. Y el requisito del *dolo* en el autor del hecho previo (cuando el hecho previo es un delito doloso, lo que ocurrirá casi siempre) es un presupuesto más fuerte en el encubrimiento, que en la teoría de la participación. Como ejemplo valga lo siguiente: si alguien se apropia de una cosa en cuya tenencia ha entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito, no comete defraudación del artículo 172, Código Penal, sino una defraudación menor del artículo 175, Código Penal. Esta subsunción diversa según el dolo del autor de la defraudación al momento del hecho (previo) no puede ser indiferente al momento en que se cometa el hecho de lavado posterior.

⁸ Repárese en que, en Alemania —para dar ahora un ejemplo que no hiera las susceptibilidades de nuestra política interna—, la última reforma legal al delito de lavado de dinero databa de 1994 (que entraba a regir en 1995), mientras que ya en 1998 se modifica la enumeración legal de los hechos precedentes.

⁹ Acerca de la posibilidad y conveniencia de entender la teoría de la participación criminal como un ilícito autónomo de cada personaje (en contra del principio de accesoriedad en sentido interno y externo), en el que la infracción individual sólo se integra también con una referencia al hecho en el que actúa otro, cf. Sancinetti, *Teoría del delito y disvalor de acción*, Hammurabi, Buenos Aires, 1990, páginas 741 y siguientes, 759 y siguientes; versión resumida en la obra, del mismo autor, *Ilícito personal y participación*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1997, páginas 57 y siguientes.

Como resumen de todo esto, es nuestra opinión que tanto en el caso de que la sanción definitiva se vuelque en favor de mantener una enumeración taxativa de hechos previos origen del lavado, como que se acepte esta propuesta de volcarse en favor de establecer un límite pecuniario por encima del cual rija el delito de lavado cualquiera que sea la naturaleza del hecho precedente, en cualquier caso es conveniente una regla explícita como la que rige en el parágrafo 258 StGB y en el artículo 452, primera parte, Código Penal español.

De allí la primera disposición común que propone este dictamen, en su artículo 279, inciso 1, que dice:

Artículo 279, inciso 1: "1) Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente".

Esta regla no significa que el autor del hecho posterior deba recibir una pena nunca superior a la que haya recibido el autor del hecho previo (supuesto el caso de que el autor del hecho previo ya hubiera sido juzgado y condenado), pues la individualización de la pena de cada autor responde a principios propios de su ilícito y culpabilidad, mientras que la regla del artículo 279, inciso 1, PA, sólo pretende que el marco del delito precedente sea, en abstracto, un submarco del delito de encubrimiento y lavado.

B) Hecho precedente sin pena privativa de libertad (artículo 279, inciso 2, en el dictamen)

Las reflexiones del punto anterior (*supra*, II, parágrafo 4, A) explican también la primera parte de la regla prevista en el artículo 279, inciso 2, inspirada en el artículo 452, Código Penal español. La segunda regla común al encubrimiento y lavado, por tanto, dice así:

Artículo 279, inciso 2, 1ª oración: "2) Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil a veinte mil pesos o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor".

El caso es demasiado hipotético, pues son difícilmente imaginables hipótesis de hechos delictivos sólo amenazados con pena de multa que puedan generar enriquecimiento. Los casos más fácilmente concebibles (hurto, robo, defraudaciones, delitos contra la administración pública, tráfico de sustancias prohibidas, contrabando, etcétera) son delitos amenazados todos con pena privativa de libertad, por más que en algunos casos pueda agregarse a ello la pena de multa.

Pero cuando menos existen algunas hipótesis que plantearían este problema: las previstas del artículo 175, Código Penal. Como ejemplo valgan los casos del inciso 1 y del inciso 2 de este artículo. Según el primero, es punible sólo con pena de multa (de mil a quince mil pesos) el que se apropia de una cosa perdida (artículo 175, inciso 1, Código Penal); según el segundo, es castigado con la misma pena el que se apropia de una cosa en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito (artículo 175, inciso 2, Código Penal).

Si se piensa, por ende, en un caso en que el autor del hecho previo se hubiera apoderado, por ejemplo, de un maletín que encontró perdido, con un botín superior a \$ 50.000 en su interior, él será punible, a lo sumo, con una pena de multa de \$ 15.000. No sería justo que el agente lavador fuera sancionado con mayor rigor (pena privativa de libertad) que el defraudador menor.

Para escoger la escala de la pena de multa en sí, del artículo 279 según el dictamen de la comisión, se ha partido de la escala del artículo 175, Código Penal (que en su pena mayor alcanza los \$ 15.000), agravada ligeramente (hasta \$ 20.000); pero siempre regirá la regla del inciso 1, que se repite en el inciso 2: si la escala penal del hecho precedente es menor (por ejemplo: artículo 175, Código Penal) regirá el máximo del marco penal del hecho precedente.

Desde luego que el marco penal escogido suena arbitrario. Del mismo modo se podría haber propuesto un máximo de \$ 90.000, como se prevé, por ejemplo, en la fórmula general del artículo 22 bis, Código Penal. Los marcos penales de la pena de multa del Código Penal argentino se han tornado tan arbitrarios (mucho más de lo que ya son también los referidos a la pena de prisión) que no hay ningún argumento determinante para fijar "el máximo correcto".

Por lo demás, el artículo 279, inciso 2, tiene una segunda oración, que pretende limitar la aplicación del tipo penal imprudente previsto por el artículo 278, inciso 2, del dictamen, exclusivamente para el lavado (no para el simple encubrimiento) el cual queda excluido cuando el hecho precedente fuere de tan escasa gravedad como para no permitir la pena privativa de libertad. Por más grave que fuese la imprudencia del hecho posterior (de lavado) no habría por qué ser tan severos con este autor, si de todos modos termina disimulando un hecho previo que bordea la impunidad.

La mentada segunda oración del artículo 279, inciso 2, del dictamen, por ello, completa la regulación así:

Artículo 279, inciso 2: "(2) ... No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2".

C) *La pena accesoria de inhabilitación (artículo 279, inciso 3, del dictamen)*

La regla del artículo 279, inciso 3, propuesto, se explica por sí misma, lo que no significa que no sea discutible (sólo que no requiere una explicación especial). La inhabilitación para el funcionario público parece sin duda justificable, al menos para el delito doloso. La inhabilitación para quien no es funcionario, pero que si desempeña una actividad necesitada de habilitación, podría justificarse prácticamente en la misma medida que la del funcionario. Mientras que, por último, la inhabilitación para el hecho cometido por imprudencia (artículo 278, inciso 2, del dictamen) es, acaso, demasiado rigurosa.

El texto completo reza así:

Artículo 279, inciso 3: "(3) Cuando el autor de alguno de los hechos descritos en el artículo 277, incisos 1 o 2, o en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno a cinco años de inhabilitación".

D) *La aplicación de la ley penal argentina (artículo 279, inciso 4)*

El inciso 4 se explica por sí solo, y responde a un criterio sumamente extendido en los proyectos que circulan en consideración. La regla dice:

Artículo 279, inciso 4: "Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión".

Un problema que esta regla aclara, consiste en distinguir los casos en que el hecho hubiera sido cometido en el extranjero —pero constituyendo delito según la ley allí aplicable—, de aquellos en que el hecho no fuera delito en su lugar de comisión, por más que, para la ley argentina, si ese hecho hubiera sido cometido en nuestro territorio, si habría sido punible. La circunstancia de que nuestro código se aplique a los hechos aquí cometidos, aun cuando el hecho precedente se hubiese cometido en el extranjero, no demuestra aún que el hecho no deba ser delito para la ley aplicable en el lugar de su comisión. El dictamen de mayoría lo aclara expresamente; pero si no lo aclarara, en verdad regiría la regla general de que si el hecho no constituyó delito en el lugar de su comisión, no fue delito y, entonces los bienes (dinero o efectos) objeto de encubrimiento o lavado son de origen jurídicamente lícito y pueden entrar aquí en libre circulación. Dicho brevemente: el hecho tiene que ser delito en forma acumulativa, para la ley argentina, y para la ley aplicable en el lugar de la comisión del hecho. Pero si se da este presupuesto, el hecho subsecuente, aquí cometido, es alcanzable por el derecho penal argentino.

5. *La derogación del artículo 25 de la ley 23.737 (artículo 30 del dictamen de mayoría)*

Los artículos 277, 278 y 279, de este dictamen, están incluidos en el articulado del proyecto como artículos 2º, 3º y 4º, mientras que el artículo 1º sólo modifica la rúbrica, del capítulo respectivo a los delitos cuya configuración se modificaría.

El artículo 30 del dictamen, por su parte, deroga el artículo 25 de la Ley de Estupefacientes 23.737. La derogación del artículo 25 viene impuesta por el hecho

de que el proyecto configura un nuevo diseño para el delito de lavado de dinero, contrario a la idea de regular el lavado, justamente, con distintas prescripciones según cuál sea el hecho precedente origen de los bienes.

El texto simplemente dice así:

Artículo 30: "Derógase el artículo 25 de la Ley de Estupefacientes 23.737 y su modificatoria ley 24.424, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90".

6. La obligación de guardar secreto sobre las informaciones (artículo 22)

En razón de que este proyecto intenta incluir también, en su articulado administrativo, la regulación de la llamada Unidad de Información Financiera, cuyo cúmulo de informaciones podría ser un elemento realmente peligroso para la reputación de las personas físicas o jurídicas cuyos datos fueran recolectados, en el caso de tales datos trascendieran a la opinión pública, el dictamen, siguiendo la recomendación general de la Comisión de Legislación Penal, incorpora un delito de "violación de secretos" propio de esta ley, con el siguiente contenido:

Artículo 22: "Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia de arrolladas en su consecuencia.

"El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.

"El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de 6 meses a 3 años. El máximo de la escala penal será de seis años, si la infidencia perjudicare manifiestamente el desarrollo de la investigación".

III. La regulación en materia penal-administrativa

Existen innumerables razones prácticas para que las infracciones al sistema de control de las informaciones que pretende ser creado juntamente con la Unidad de Información Financiera no integren el Código Penal, sino el sistema de sanciones administrativas.

Entre ellas cabe destacar que cuando la sanción a imponer debe ser extendida a una persona jurídica, o directamente debe ser impuesta a ella como infractora principal, sean inadecuadas las reglas propias del proceso penal —armadas con todo su conjunto de garantías, para el derecho penal nuclear, clásico, de un imputado frente al Estado—. La suplantación del imputado por el "presidente de la compañía", como está ocurriendo en algunos juzgados para la aplicación de normas penales que sin embargo no tienen a la persona jurídica como infractora, sino a los responsables de su conducción, es un procedimiento totalmente extraño y

fuente de toda clase de malentendidos. Mientras el proceso penal no esté acompañado de un conjunto de reglas suficientemente estudiadas, y puestas a prueba para la incriminación de las personas jurídicas, la responsabilidad de éstas por infracciones de cualquier clase debe seguir regida por el derecho administrativo.

Por lo demás, la calificación estrictamente penal de las "infracciones de información" que identifican los diferentes proyectos, tampoco es necesaria ni acertada desde el punto de vista material. Se trata de reglas predominantemente concebidas para la selección de informaciones que un ente administrativo tendrá que utilizar luego con determinada política, dentro de la cual habrá, ciertamente, una sección de política criminal (por ejemplo, para la persecución de los autores personales de hechos punibles en sentido estricto).

El dejar esta sección en manos del derecho penal-administrativo le hará perder a las infracciones creadas por la ley el carácter siempre infamante que tiene el proceso penal, o, al menos, agobiante en la práctica. Estas infracciones tienen que tener otro cariz, establecer la responsabilidad de personas determinadas o entes jurídicos de modo que se asegure el derecho de defensa en juicio, pero sin las particularidades propias del proceso penal normal (piénsese, por ejemplo, en las complicaciones que derivarían de incorporarse un sistema de jurados para el proceso penal).

De allí que todo lo que no sean las acciones típicas previstas en los artículos 277 y 278 de este dictamen (artículos 29 y 39) deben quedar para una sección de derecho penal-administrativo.

Esto es lo que se propone en este proyecto, con arreglo a un articulado sencillo, cuyo contenido —según entendemos— se explica por sí mismo, por lo tanto aconsejan las comisiones en su conjunto su sanción.

Juan C. Maqueda.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia, de Legislación Penal, de Drogadicción, de Finanzas, y de Transportes, han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, así como aquellos proyectos de ley de la señora diputada Carrió y otros señores diputados, del señor diputado Pichetto, del señor diputado Larraburu, y de los señores diputados Alvarez (C. A.) y otros, y teniendo a la vista el expediente 4.885-D.-1998 de los señores diputados Raimundi y Viqueira, por los cuales se previene y reprime la legitimación de activos provenientes de ilícitos, y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*REFORMA DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO
Y CREACION DE UN SISTEMA PARA LA
PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS PROVENIENTE DE DELITOS
DE ESPECIAL GRAVEDAD

CAPÍTULO I

Modificación del Código Penal

Artículo 1º — Sustitúyese la rúbrica del capítulo XIII del título XI, del Libro Segundo del Código Penal ("Encubrimiento"), por el de "Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 277: 1. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro:

- Ayudare a un sujeto responsable a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta;
- Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al responsable a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer;
- Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito;
- No denunciare la perpetración de un delito o la individualización del responsable de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole;
- Asegurare o ayudare a un responsable a asegurar el producto o provecho del delito.

2. La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:

- El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión;
- El autor actuare con ánimo de lucro;
- El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.

La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 278: 1. a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de

cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran, la apariencia de un origen lícito, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

2. El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descritos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte al ciento cincuenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito.

3. El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277.

4. Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 o 3 de este artículo podrán ser decomisados.

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 279: 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.

2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil a veinte mil pesos o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2.

3. Cuando el autor de alguno de los hechos descritos en el artículo 277, incisos 1 o 2, o en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno a cinco años de inhabilitación.

4. Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.

CAPÍTULO II

Unidad de Información Financiera

Art. 5º — Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como entidad autárquica, con dependencia

jerárquica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, regida por las disposiciones de la presente ley.

Art. 6º — La UIF será un organismo técnico con autonomía funcional, encargada de la recopilación, estudio, análisis y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir la legitimación de activos proveniente de:

- a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
- b) Delitos de contrabando de armas (ley 22.415);
- c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;
- d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
- e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal);
- f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal.

Art. 7º — La UIF tendrá su domicilio en la capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.

Art. 8º — La UIF estará integrada por nueve miembros designados de la siguiente manera:

Un funcionario del Banco Central de la República Argentina, un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, un funcionario de la Comisión Nacional de Valores, designados por sus respectivos organismos y un experto en temas relacionados con el lavado de activos designado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Estos miembros deberán ser funcionarios de carrera y serán designados por concurso interno del organismo respectivo.

Cinco expertos financieros seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión *ad hoc* integrada de la siguiente forma:

- Dos miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios.
- Dos funcionarios del Ministerio Público elegidos por el procurador general de la Nación.
- Un miembro del directorio del Banco Central elegido por su presidente.
- Un miembro designado por el Ministerio de Justicia.
- Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores.
- Un miembro designado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 9º — La selección de los expertos financieros, en los plazos que determine la reglamentación, se ajustará a las siguientes directivas:

- a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. La comisión *ad hoc* convocará a concurso dando a publicidad las fechas de exámenes;
- b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación y los antecedentes que serán computables.

La prueba de oposición procurará evaluar tanto la formación teórica como la práctica.

La comisión *ad hoc* realizará la preselección de los postulantes a integrar la Unidad de Información Financiera a los efectos de preparar una nómina de aquellos que acrediten idoneidad suficiente para presentarse a concurso público de oposición y antecedentes.

Art. 10. — Los miembros de la UIF tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos.

Durarán cuatro años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de cámara de la justicia nacional.

Podrán resolver la remoción de sus cargos por el voto de las dos terceras partes de los miembros totales del cuerpo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa.

Art. 11. — Para ser integrante de la UIF se requerirá

1. Poseer título universitario de grado en derecho o en disciplinas relacionadas con las ciencias económicas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea ni durante los dos años posteriores a su desvinculación de la UIF, actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés directo o indirecto en ella.

Art. 12. — La UIF contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La UIF podrá solicitar a otros titulares de organismos de la administración pública nacional la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.

La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la UIF con las de los organismos de origen a los que pertenecen.

Art. 13. — Es competencia de la UIF:

1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley.
2. Analizar los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar legitimación de activos provenientes de los ilícitos previstos en el artículo 6º de la presente ley y poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.
4. Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Art. 14. — La UIF estará facultada para:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

La UIF podrá solicitar en cada caso, mediante resolución judicial, que no le sean opuestos a sus requerimientos de información, disposiciones que establezcan el secreto de la misma.

2. Recibir declaraciones voluntarias.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla.
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al juez competente la suspensión de la ejecución de cualquier operación o acto vinculado con otro previamente informado conforme al inciso b) del artículo 21 de la presente ley, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de algunos de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley.
6. Solicitar al Ministerio Público arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.
7. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso y la defensa en juicio. Estas sanciones podrán ser recurridas por ante el Ministerio de Justicia.
8. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia UIF o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y ex-

tranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.

9. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley coordinándolas con las de los organismos específicos de control existentes.
10. Recomendar la implementación de sistemas de contralor interno, para las personas a que se refiere el artículo 20, estableciendo normas y procedimientos.

Art. 15. — La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:

1. Presentar a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación, ante las comisiones competentes, al menos una vez durante el período ordinario, a los efectos de informar sobre la marcha de sus actividades.
2. Conformar un registro único de archivos públicos con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba y de los casos denunciados y analizados.

Art. 16. — La UIF se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de cinco miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta ley prevea una mayoría especial.

Art. 17. — La UIF recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar que la suministren. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el artículo 21 de esta ley podrán formular denuncias ante la UIF.

Art. 18. — El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 19. — Cuando de las informaciones aportadas o de las investigaciones realizadas, surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal.

CAPÍTULO III

Deber de informar. Sujetos obligados

Art. 20. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente ley:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.528 y modificatorias y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.

2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y sus modificatorias y las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual, operen en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio y los organismos administrativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros nacionales del automotor y los registros prendarios.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Los escribanos matriculados.
11. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
12. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.
14. Las personas físicas o jurídicas inscritas en los registros establecidos por el artículo 23, inciso t), del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
15. Los productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades están regidas por las leyes 20.091, 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias.
16. Los profesionales matriculados y los apoderados, mandatarios, consignatarios y fideicomisarios, excepto cuando actúen en defensa en juicio.
17. Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la

Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia.

No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por juez competente a solicitud de la Unidad de Información Financiera, con fundamento en esta ley.

Art. 21. — Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidos a las siguientes obligaciones:

a) Recabar de sus clientes o requirientes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto.

Cuando los clientes o requirientes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad real de la persona o personas por quienes actúen.

Toda esta información deberá archivar-se por el término y según las formas que la UIF establezca;

b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley, se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, así como también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.

La UIF establecerá las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad;

c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Art. 22. — Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.

El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera que por sí o por otro revele las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera serán reprimidos con prisión de 6 meses a 3 años. El máximo de la escala penal será de seis años, si la infidencia perjudicare manifiestamente el desarrollo de la investigación.

CAPÍTULO IV

Régimen penal administrativo

Art. 23. — 1. Será sancionada con multa de dos a diez veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278, inciso 1, del Código Penal. El delito se considerará configurado, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.

2. Cuando el mismo hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos en el sentido del artículo 278, inciso 2, del Código Penal, la multa a la persona jurídica será del veinte al sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito.

3. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil a cien mil pesos.

Art. 24. — 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionado con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.

2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto personalmente infractor.

3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil a cien mil pesos.

Art. 25. — Las resoluciones de la UIF previstas en este capítulo serán recurribles vía administrativa, ante el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y posteriormente ante la justicia en el fuero contencioso administrativo.

Art. 26. — Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1.101 y siguientes y 3.982 bis del Código Civil, entendiendo por "acción civil" la acción "penal-administrativa".

Art. 27. — A todos los efectos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan serán considerados recursos del Tesoro nacional.

Para el funcionamiento de la UIF, deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente al Tesoro nacional, para su administración.

CAPÍTULO V

El Ministerio Público Fiscal

Art. 28. — La Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal.

Los miembros de Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica de Ministerio Público.

CAPÍTULO VI

Disposiciones generales

Art. 29. — En caso de actividades relacionadas con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, se aplicarán las disposiciones de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, en cuanto fueran compatibles.

Art. 30. — Deróganse el artículo 25 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90 y el decreto 1.426/96, anexo.

Art. 31. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 18 de mayo de 1999.

Alfredo N. Atanasof. — Eduardo O. Camarero. — Emilio E. Carrara. — Esteban A. Dómina. — Elsa Melogno. — Ana M. Mosso. — Juan C. Pezoa. — Eduardo D. Rollano. — Carlos D. Snopce. — Juan C. Suárez.

INFORME

Honorable Cámara:

Luego de analizar pormenorizadamente las distintas iniciativas presentadas, creemos necesario sostener algunas diferencias con respecto del proyecto de dictamen propuesto por la subcomisión creada a efecto sobre reforma del delito de encubrimiento y creación de un sistema para la prevención y represión del lavado de activos provenientes de delitos de especial gravedad.

Las principales modificaciones introducidas son las siguientes:

— En el artículo 2º, la supresión del inciso 3 con el objeto de eliminar en su totalidad la exención de responsabilidad criminal que amparaba a cónyuges, parientes y otros, por considerar injustificada e inconveniente tal exención.

— En el artículo 3º, la supresión en el inciso 1a) del límite de \$ 50.000 para considerar o no delictuoso un acto de dominio sobre bienes provenientes de un delito.

El delito existe y la pena corresponde independientemente del monto del valor del bien objeto de transacción.

— En el artículo 5º, se establece que la Unidad de Información Financiera a crear como entidad autárquica, lo sea en el ámbito y con dependencia jerárquica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, atendiendo así a sanos principios de administración pública que aconsejan evitar la proliferación de organismos aislados sin vinculaciones jerárquicas.

El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos pareciera ser el ámbito natural en el que deberá desenvolver sus actividades el nuevo organismo, en razón de su objeto.

— En el artículo 6º, se elimina la expresión "sancionar", para evitar que se interprete que la UIF tendrá, por sí, facultades sancionatorias propias de la justicia penal.

— En el artículo 7º, se limita a "agencias regionales" el número de las que la UIF podrá establecer en el país, con el objeto de evitar la multiplicación de las mismas y el consiguiente incremento del costo operativo de la Unidad.

— En el artículo 8º, se propone ampliar el número de integrantes de la UIF con la incorporación de un funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

Se amplía la representatividad de la comisión *ad hoc* encargada de la selección de los cinco expertos financieros que integrarán la UIF.

Se exige que la reglamentación establezca plazos para el trámite de selección (artículo 9º) y que las remociones sean propuestas por el organismo (artículo 10º).

— En el artículo 11, se limita a diplomados en derecho o ciencias económicas el requisito académico a reunir por los integrantes de la UIF, por entender que las ciencias informáticas son de carácter instrumental respecto de las funciones que competen a la Unidad.

Se cambia la óptica de la incompatibilidad del inciso 3, haciéndola contemporánea o ex post con las actividades a desarrollar por los expertos, por considerar que ello resulta de mayor y mejor efecto sobre sus funciones.

— En el artículo 12, se establecen las funciones a desempeñar por los oficiales de enlace, asunto éste omitido por el proyecto original.

— En los artículos 13 y 14, se precisa la competencia de la UIF y las facultades que poseerá, con una nueva redacción de las mismas, acorde con la naturaleza del organismo.

— En el artículo 15, en el inciso 2, se establece que es obligación de la UIF conformar un registro único de archivos públicos, expresión que se considera más correcta y posible que la original de registro único de archivos.

— En el artículo 20, se propone un nuevo texto que clarifica la nómina de sujetos obligados a proporcionar información a la UIF incluyendo en el inciso I, a las AFJP, mejorando y ampliando la enumeración del inciso 6 y del inciso 16.

Se aclara en el inciso 17, la facultad de la UIF en el secreto bancario, fiscal o profesional y los compromisos de confidencialidad.

— En el artículo 27, se establece que los recursos que se obtengan por las actividades de la UIF, serán

considerados recursos del Tesoro nacional, modificando el proyecto original que los consideraba propios de la UIF, lo cual conllevaba, a nuestro entender, un peligro cierto de acciones irregulares derivadas del interés de la Unidad de hacerse de recursos.

— En el artículo 30, se deroga también, por ser pertinente, el decreto 1.426/96, anexo.

En resumen, se proponen cambios que persiguen precisar aspectos relativos a los delitos conexos al lavado de dinero y se introduce una nueva concepción de la Unidad de Información Financiera, autárquica pero dependiente jerárquicamente del Ministerio de Economía, con funciones, facultades y obligaciones consistentes con dicha concepción.

Se mejora la nómina de sujetos obligados a informar y se establecen precisiones sobre dicha obligación.

Por último, se cambia sustancialmente el destino de los recursos que generen las actividades de la UIF, la cual, para su funcionamiento, deberá contar con la asignación presupuestaria correspondiente.

Es por todo ello que sometemos el presente dictamen a la consideración del plenario de la Honorable Cámara, solicitando su aprobación.

Ana M. Mosso.

ANTECEDENTES

I

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY QUE PREVIENE Y REPRIME LA LEGITIMACION DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ILICITOS

CAPÍTULO I

Delitos y sanciones

Artículo 1º — Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación, el que tuviere, usare, dispusiere o administrare dinero, recurso o bienes procedentes de ilícitos relacionados con el terrorismo en los términos del artículo 210 bis del Código Penal, con la producción tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, con el tráfico ilícito de armas, tráfico de seres humanos, tráfico de órganos humanos, defraudación en perjuicio de una administración pública, extorsión, secuestro extorsivo y los contemplados en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI, del Libro Segundo del Código Penal.

Se entenderá que el monto de la operación es el valor real de mercado de los bienes o recursos, según corresponda. Cuando no se pudiere establecer el valor real, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a quinientos mil pesos (\$ 500.000).

Art. 2º — La responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo alcanzará a quienes obren legal o voluntariamente por otro; trátese éste de una persona física o jurídica, o de cualquier ente, asociación u organización pública o privada, con o sin personalidad jurídica, cualesquiera sean sus formas de cons-

tutición y funcionamiento. En todos los supuestos la responsabilidad existirá aun cuando el acto que sirve de fundamento a la representación sea ineficaz o cuando ésta sea ejercida de hecho.

Art. 3º — El que sin causa justificada omitiere informar actos o actividades sospechosas, estando obligado a ello, será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) veces el monto de la operación sospechada, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Las personas jurídicas obligadas a informar actos o actividades sospechosas que omitan dicho cometido sin causa justificada serán sancionadas con multa de diez (10) a cincuenta (50) veces el monto de la operación sospechada.

El que por negligencia o impericia en su arte o profesión omitiere informar actos o actividades sospechosas, estando obligado a ello, será reprimido con multa de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación sospechada.

Se entenderá que el monto de la operación es el valor real de mercado de los bienes o recursos según corresponda. Cuando no se pudiere establecer el valor real, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a quinientos mil pesos (\$ 500.000).

Constituyen actos o actividades sospechosas aquellas de naturaleza civil, comercial o financiera que tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de complejidad inusitadas o injustificadas, o no sean habituales, o se aparten significativamente de los usos y costumbres, o que, por cualquier motivo, parezcan no tener justificación económica u objeto lícito.

Art. 4º — Los funcionarios o empleados de la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley tienen el deber de mantener estrictamente el secreto de las informaciones recibidas y de las tareas desarrolladas.

Los funcionarios o empleados de la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley, las personas físicas o jurídicas obligadas a informar actos o actividades sospechosas y las personas relacionadas profesional o laboralmente a ellas que divulguen informes presentados ante la UIF o las investigaciones realizadas por ésta, serán reprimidos con reclusión o prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación sospechada.

Se entenderá que el monto de la operación es el valor real de mercado de los bienes o recursos, según corresponda. Cuando no se pudiere establecer el valor real, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a quinientos mil pesos (\$ 500.000).

Art. 5º — Las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo para el funcionario público que, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, participe de los delitos previstos en esta ley.

Con la misma pena serán reprimidos los que utilicen medios o procedimientos tecnológicos, ya sean electrónicos o de cualquier naturaleza, que faciliten la comisión de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley o dificulten su detección.

Art. 6º — En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos

provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a financiar el funcionamiento de la UIF, los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424 y los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional. Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

Art. 7º — Esta ley se aplicará aunque el delito o hecho ilícito origen de los recursos, bienes o dinero cuya legitimación se pretenda, se hubiese cometido en el extranjero.

CAPÍTULO II

Deber de informar. Sujetos obligados

Art. 8º — Las personas físicas o jurídicas comprendidas en la enumeración del artículo siguiente, están obligadas a informar a la UIF creada por esta ley los actos o actividades sospechosas que adviertan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º.

La reglamentación establecerá las modalidades, oportunidad y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad.

Art. 9º — Están obligados a informar, en los términos del artículo anterior:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual, operen en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o de pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuros y opciones, cualquiera sea su objeto.

6. Los registros públicos de la propiedad y de comercio y los organismos administrativos de fiscalización o control de personas jurídicas.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad inmobiliaria, compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, y a la negociación o elaboración de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero y emisoras u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Los escribanos matriculados.
11. Los profesionales matriculados cuya actividad está reglamentada por la ley 20.488.
12. Las empresas dedicadas al transporte de cargas y mercancías.
13. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
14. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales.
15. Las entidades comprendidas en el artículo 99 de la ley 22.315.
16. Las personas físicas o jurídicas inscritas en los registros establecidos por el artículo 23, inciso t) del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
17. Los productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades están regidas por las leyes 20.091, 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias.

La reglamentación actualizará periódicamente la lista de actividades que generen la obligación de informar.

Art. 10. — Las personas señaladas en el artículo precedente deberán recabar de sus clientes o requirentes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.

Cuando los clientes o requirentes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de obtener la identidad real de la persona o personas por quienes actúen.

Toda esta información deberá archivarla por el término y según las formas que la circular establezca.

CAPÍTULO III

Unidad de Información Financiera

Art. 11. — Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, gozará de autonomía funcional y actuará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

Art. 12. — La UIF estará integrada por un directorio compuesto por el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia, el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, el presidente del Banco Central de la República Argentina y por un fiscal general designado por la Procuración General de la Nación.

El directorio será presidido, alternativamente cada doce (12) meses, por cada uno de sus miembros.

La UIF se integrará además con ocho miembros designados por concurso público de oposición y antecedentes, que podrán proponer al directorio los cursos de acción que consideren adecuados.

El directorio designará, entre ellos, un secretario ejecutivo y dos secretarios ejecutivos alternos.

El directorio tendrá como función trazar los lineamientos generales para el desempeño de la UIF.

La UIF tomará sus decisiones por el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros del directorio. En caso de igualdad en la votación decidirá el presidente.

Art. 13. — Los miembros de la UIF designados por concurso público de oposición y antecedentes tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos.

Durarán un período de cuatro (4) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida.

Deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho o disciplinas relacionadas con las ciencias económicas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Art. 14. — La UIF contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares de la Secretaría de Justicia, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Banco Central de la República Argentina, Dirección General Impositiva, Administración Nacional de Aduanas, Inspección General de Justicia, Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Podrá solicitar a la Policía Federal Argentina y demás fuerzas de seguridad y a los titulares de los restantes organismos de la administración pública nacional la designación de otros oficiales de enlace.

Art. 15. — La UIF tendrá a su cargo, entre otras funciones, intervenir e instruir las actuaciones a que dieran lugar las disposiciones de esta ley.

Realizará sus tareas en la sede que al efecto se establezca, con los instrumentos técnicos adecuados para acceder a las bases de datos necesarias.

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico deberá mantener, organizar y administrar un banco de datos

para el almacenamiento y recuperación de información exclusivamente relativa a actividades de legitimación de activos provenientes del narcotráfico y actividades conexas. A tal efecto será competente para celebrar, con conocimiento de la UIF, acuerdos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros en la materia.

Art. 16. — Es competencia de la UIF:

1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 8°.
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar legitimación de activos provenientes de ilícitos y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público para el ejercicio de las acciones pertinentes.

Art. 17 — La UIF está facultada para:

1. Disponer exámenes periciales administrativos, para lo cual podrá requerir a las reparticiones públicas, funcionarios públicos o universidades nacionales, la colaboración necesaria para realizarlos. Cuando sea necesario estará facultada para designar peritos *ad hoc*.
2. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

Cuando se trate de personas físicas o jurídicas sometidas al control o superintendencia de un organismo público, la información a que se refiere el párrafo anterior deberá requerirse, en primer lugar, al órgano de control respectivo.

No podrá oponerse a la UIF disposición alguna que establezca el secreto de la información requerida.

3. Solicitar del juez federal en turno la orden de allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal, el secuestro de toda documentación o elementos útiles para la investigación, la interceptación de correspondencia, la intervención de comunicaciones telefónicas y cualquier otro medio electrónico de transferencia de datos, cuando resulte necesario para la investigación. Deberá indicar los motivos de la solicitud y la necesidad de la medida.
4. Ordenar y recibir declaraciones administrativas. También podrá recibir toda manifestación voluntaria, verbal o escrita, de los interesados.
5. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla. También podrá requerir a través del juez federal en turno el auxilio de las fuerzas policiales y/o de seguridad.
6. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.

7. Solicitar al juez competente la suspensión de la ejecución de cualquier operación o acto informado conforme al artículo 8°, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas.

8. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia UIF o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter.

9. Disponer la implementación de sistemas de control interno para las personas a que se refiere el artículo 9°, en los casos y modalidades que la reglamentación determine.

Art. 18. — La UIF aprobará su reglamento interno y podrá delegar determinadas funciones en los órganos que se creen a tal efecto.

Art. 19. — El Ministerio de Justicia proveerá a la UIF la sede para su funcionamiento.

Art. 20. — La UIF recibirá informaciones, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar que la suministren. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en los artículos 8°, 9° y 10 de esta ley podrán formular denuncias ante la UIF.

Art. 21. — El cumplimiento de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 22. — Cuando de las informaciones aportadas o de las investigaciones dispuestas o dirigidas por la UIF, surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en el artículo 1° de la presente ley, serán canalizadas por la UIF según las previsiones del artículo 23.

Las informaciones obtenidas por la UIF sólo podrán ser utilizadas para los fines perseguidos en la presente ley y en el marco de sus incumbencias.

CAPÍTULO IV

El Ministerio Público Fiscal

Art. 23. — El fiscal general designado por la Procuración General de la Nación de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 cumplirá funciones de enlace con la UIF y recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal.

Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales

Art. 24. — Será competente la Justicia federal para entender en los procesos por los delitos previstos en esta ley, y los que resultaren conexos en los términos del artículo 1º.

Art. 25. — En caso de actividades relacionadas con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, se aplicarán las previsiones de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, en cuanto fueran compatibles.

Art. 26. — Derógase el artículo 25 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90. La UIF ajustará sus procedimientos e investigaciones a las normas del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto fueran compatibles con las disposiciones contenidas en la presente ley.

Art. 27. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS SAÚL MENEM,

Jorge A. Rodríguez. — Raúl E. Granillo
Ocampo.

2

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

CREACION DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DINERO DE PROCEDENCIA NO JUSTIFICADA

Artículo 1º — Créase la Unidad de Prevención y Seguimiento de Dinero de Procedencia No Justificada, dependiente directamente del procurador general de la Nación.

Constitución - Comisión Asesora

Art. 2º — La misma estará constituida por cinco fiscales, con rango equivalente al de fiscal de cámara, quienes gozarán de los beneficios previstos en la última parte del artículo 120 de la Constitución Nacional, seleccionados por concurso público de oposición de antecedentes por el procurador general de la Nación, y será asesorada por una comisión permanente, que se integrará con un funcionario representante de cada uno de los siguientes organismos:

- Secretaría de Inteligencia del Estado;
- Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico;
- Secretaría de Coordinación del Ministerio de Economía;
- Banco Central de la República Argentina;
- Procuración del Tesoro de la Nación.

Funciones y atribuciones

Art. 3º — La Unidad de Prevención y Seguimiento, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- Procesar la información que deberán cursar las entidades obligadas conforme al artículo 5º;

- Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, en el marco de una investigación judicial o extrajudicial, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, los que estarán obligados a suministrarla en el plazo que se le fije;
- Llevar adelante la pretensión pública, por sí o a través del agente fiscal competente en caso de delitos de jurisdicción federal, y realizar la denuncia pertinente ante las autoridades judiciales respectivas en caso de delitos de jurisdicción local, de constatar su posible existencia a través del procedimiento señalado en el punto a);
- Practicar las diligencias para las que el Código Procesal Penal los faculta, pudiendo constituirse para su mejor diligenciamiento en cualquier lugar de la República;
- Colaborar con los funcionarios judiciales que así lo requieran, en la investigación de ilícitos conexos con la información que manejan;
- Dictar su reglamento interno.

Artículo 4º — No podrán revelar la información con la que contaren sino en el marco de una investigación judicial seguida por la comisión de un hecho ilícito, como tampoco hacer trascender las investigaciones que practiquen en procura de la determinación de aquél. A quienes así lo hicieren, sea en forma dolosa o culposa, se le impondrá la pena prevista en el artículo 157 del Código Penal, sin perjuicio de incurrir en otro delito más severamente penado.

Obligados a informar

Art. 5º — Se encuentran obligados a informar las operaciones o transacciones de las que tomen conocimiento o intervengan, por un monto superior a pesos cincuenta mil (\$ 50.000) mensuales o doscientos cincuenta mil (\$ 250.000) anuales por persona física o jurídica, las siguientes entidades:

- Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526;
- Las personas físicas o jurídicas previstas en la ley 18.924;
- Los agentes, concesionarios o explotadores de juegos de azar;
- Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen en el marco de las bolsas de comercio con o sin mercados adheridos;
- Las sociedades que realicen transmisión de fondos dentro y fuera del país;
- Los registros públicos de propiedad mueble e inmueble;
- Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad inmobiliaria, compraventa de obras

de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática, y quienes intervengan en el proceso de confección o fabricación de metales o piedras preciosas;

- h) Las empresas aseguradoras;
- i) Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito;
- j) Los escribanos matriculados;
- k) Las empresas prestatarias de servicios postales;
- l) Las empresas transportadoras de caudales.

La información mencionada, además del monto de la operación, deberá contener el nombre y apellido de la persona física o razón social de la persona jurídica, número de documento, CUIT o GUIL, domicilio y actividad que desarrolla.

Penalidades

Art. 6º — Las personas físicas y los responsables de personas jurídicas, que en forma dolosa o culposa omitieren informar a la Unidad de Prevención y Seguimiento de Dinero de Procedencia No Justificada, las operaciones descritas en el artículo anterior, serán castigadas con prisión de seis meses a cinco años y multa de diez mil a quinientos mil pesos (\$ 10.000 a \$ 500.000), e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Reglamentación

Art. 7º — Dentro de los ciento ochenta (180) días de puesta en funcionamiento la Unidad que por la presente se crea, deberá dictar su reglamento, que contemplará los mecanismos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Presupuesto

Art. 8º — Autorízase a la Procuración General de la Nación a afectar la partida presupuestaria necesaria para dotar a la Unidad que por la presente se crea de los elementos tecnológicos y personales necesarios para su adecuado funcionamiento.

Art. 9º — Los gastos del cumplimiento de la presente incrementarán la partida presupuestaria correspondiente a la Procuración General de la Nación y se imputarán a "Rentas generales".

Art. 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dámaso Larraburu.

3

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

PREVENCION, CONTENCION, DETECCION TEMPRANA Y REPRESION DEL DELITO INTERNACIONAL DE LAVADO DE DINERO

CAPÍTULO I

Delito de lavado de dinero

Artículo 1º — Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años, inhabilitación absoluta

por doble tiempo del de la condena y una multa de hasta diez (10) veces el monto de la operación, quien a sabiendas, o debiendo saber, o con ignorancia intencional, realice por sí o por interpósita persona, actos de administración o de disposición, a cualquier título jurídico y por cualquier causa, con o sin contraprestación, respecto de bienes por el monto que la reglamentación determine, provenientes de:

- a) Tráfico y/o comercialización ilícitos o no autorizados de:

1. Estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
2. Seres humanos.
3. Organos humanos.
4. Fauna y flora.
5. Armas y explosivos de todo tipo.
6. Residuos tóxicos y/o radiactivos.
7. Precursores y/o productos químicos;

- b) Actividades delictivas de grupos organizados, o que reúnan al menos dos de las siguientes características:

1. Tener tres integrantes como mínimo.
2. Poseer una conformación de tipo empresarial.
3. Operar en dos o más países, o en dos o más subdivisiones políticas (provincias, estados, departamentos, cantones, regiones) de un mismo país.
4. Contar con nexos de cualquier tipo con otros grupos organizados, en la República Argentina o en el extranjero.
5. Recibir apoyo, ayuda, incluso financiera y/o económica, de funcionarios públicos, o de gobiernos extranjeros, organizaciones políticas o personas físicas o jurídicas con sede en países extranjeros, o actuar bajo su dirección o influencia dominante;

- c) Los delitos de:

1. Fraude en perjuicio de alguna administración pública.
2. Cohecho.
3. Malversación de caudales públicos.
4. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
5. Excepciones ilegales.
6. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos.
7. Prevaricato de jueces y/o magistrados judiciales.
8. Extorsión.
9. Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito.
10. Los actos de corrupción descritos en el artículo VI.1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, ratificada por la ley 24.759.

Art. 2º — Será pasible de la pena de reclusión o prisión de dos (2) a diez (10) años y de una multa de hasta diez (10) veces el monto de la operación, la

persona que oculte, encubra o impida la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas, debiendo saber, o con ignorancia intencional de que tales bienes son producto de una o más de las actividades ilícitas enumeradas en dicha disposición. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, configuran casos particulares de encubrimiento del delito de lavado de dinero:

- a) Los actos, cumplidos en la República Argentina o en el extranjero, destinados a ocultar, simular, disimular o encubrir el origen de los bienes, así como su localización, movimientos, disposición o destino, y a ocultar, simular, disimular o encubrir la titularidad de sus reales propietarios, derechohabientes y/o controlantes;
- b) Los actos, cumplidos en la República Argentina o en el extranjero, destinados a ayudar a los autores o partícipes de las actividades delictivas en cuestión a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse a su acción;
- c) La omisión de denuncia, por quien tenga obligación legal de formularla.

Art. 3º — Cuando los delitos descritos en los artículos precedentes sean cometidos con intervención, interposición o abuso de la personalidad de una entidad de existencia ideal, los integrantes de sus órganos de administración y fiscalización, gerentes, mandatarios, agentes y/o representantes que a sabiendas, o debiendo saber, o con ignorancia intencional, hayan cooperado en la ejecución de alguno de dichos ilícitos, sufrirán las sanciones establecidas en las referidas normas, sin perjuicio de la imposición a la entidad de una multa, que podrá alcanzar hasta diez (10) veces el valor de los bienes involucrados, y de ordenarse su disolución y liquidación forzosa previo retiro, cuando corresponda, de la autorización para funcionar.

CAPÍTULO II

Organismos de control, supervisión y superintendencia

Art. 4º — Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y negocios jurídicos y/o sobre los sujetos de derecho, individuales o colectivos, tienen las siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de los que resulten de sus propias cartas orgánicas, reglamentos y demás normas específicas:

- a) Exigir a las personas y entidades supervisadas o controladas la confección y remisión de informes periódicos, datos estadísticos e informes especiales sobre determinadas operaciones y/o sobre las actividades de determinadas personas,

firmas o grupos económicos con los que mantengan relaciones comerciales, financieras o con incidencia financiera;

- b) Solicitar a las personas y entidades supervisadas o controladas copias fehacientes de documentación relevante a los efectos de investigaciones en curso;
- c) Invitar a socios, directivos, gerentes, asesores y/o dependientes de las entidades supervisadas o controladas y/o a otras personas a prestar en presencia de fedatario, declaraciones juradas documentadas acerca de hechos de los que tengan conocimiento personal y puedan relacionarse con operaciones o actividades de lavado de dinero, potencialmente útiles para desbaratar dichas operaciones o actividades y/o enjuiciar y condenar a sus autores, cómplices y encubridores y al decomiso de los bienes o de su producido;
- d) Investigar preventivamente las actividades susceptibles de ser encuadradas como lavado de dinero, ocurridas, en curso o en ciernes, en el ámbito de su competencia, de que reciban noticia por comunicación directa o denuncia divulgada por un medio de comunicación, o que adviertan con ocasión de una inspección auditoría, veeduría o cualquier otra averiguación efectuada en ejercicio de sus funciones. Cuando el resultado de la investigación sea negativo o no pueda llegarse a una determinación concluyente dentro de los noventa (90) días de la iniciación, lo comunicarán a la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes, indicando sucintamente las razones de la conclusión o de la indeterminación. Será privativo de dicha unidad solicitar la remisión completa de los antecedentes y datos reunidos, y, en su caso, reabrir o proseguir la investigación, o clausurarla definitivamente;
- e) Elevar a la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes, sin dilación alguna, las conclusiones positivas de las investigaciones preventivas realizadas, que deberán ser respaldadas por un dictamen legal en el que expondrán las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse la sospecha o certeza de que las actividades u operaciones investigadas configuran lavado de dinero, y por los elementos de juicio (documentos, dictámenes periciales, informes y declaraciones juradas) que le sirva de base;
- f) Enviar a las entidades controladas y/o supervisadas información que les permita mantener permanentemente actualizado su conocimiento de las técnicas, ardidés, artificios o instrumentos empleados para organizar actividades y preparar, facilitar y consumir operaciones de lavado de dinero.
- g) Monitorear el cumplimiento, por parte de las entidades controladas y/o supervisadas, de la obligación de desarrollar o participar en programas de capacitación, entrenamiento y ac-

tualización permanente de sus gerentes y empleados, para la detección temprana y prevención de las operaciones de lavado de dinero.

A efectos de cumplimentar adecuadamente lo preceptuado en los párrafos precedentes de este artículo, los organismos de control, supervisión y superintendencia deberán ordenar sus bases de datos o, en su caso, conformar nuevas, incluyendo en ellas el universo de sus controlados, supervisados o fiscalizados, de acuerdo al rango identificatorio (CUIT/CUIL/DNI) que fije la reglamentación, y mantenerlas de forma tal que posibiliten reconstruir las transacciones almacenadas en condición tal que permita su verificabilidad.

Art. 59 — A los efectos del artículo anterior se entenderán por organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia:

1. El Banco Central de la República Argentina.
2. La Administración Federal de Ingresos Públicos.
3. La Superintendencia de Seguros de la Nación.
4. La Comisión Nacional de Valores.
5. La Inspección de Personas Jurídicas.
6. Los registros de bienes registrables.
7. Las direcciones de Rentas.
8. Las loterías y casinos.
9. Los restantes organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y negocios jurídicos y/o sobre los sujetos de derecho, individuales o colectivos que desarrollan las primeras y concieran los segundos.

Art. 60 — Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 49 de la presente ley, los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia deberán:

- a) Reglamentar y vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro previstas en la presente ley, sin perjuicio de las que resulten de sus propias cartas orgánicas, reglamentos y demás normas específicas;
- b) Brindar a la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes, al Ministerio Público y a la Justicia competente, la información requerida, así como también cooperar y aportar asistencia técnica en el marco de las investigaciones y procesos desarrollados por aquéllos;
- c) Mantener las bases de datos que permitan reconstruir las transacciones almacenadas;
- d) Adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar los delitos previstos en esta ley.

CAPÍTULO III

Obligación de llevar registros

Art. 70 — Deberán llevar registro actualizado de todas las operaciones que realicen las siguientes entidades:

- a) Las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales por la ley de la materia;
- b) Las casas, agencias y oficinas de cambio;
- c) Las empresas y entidades aseguradoras;
- d) Los agentes bursátiles y extrabursátiles, las sociedades de bolsa, las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, los agentes de mercado abierto electrónico y todos los que, en cualquier forma, intermedien en la compra, alquiler, préstamo, caución, pase u otras operaciones con títulos valores, que actúen en la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados de títulos valores adheridos;
- e) Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros, opciones y demás derivados financieros, sean cuales fueren los negocios subyacentes;
- f) Las personas individuales o colectivas que actúen como depositarias de bienes pertenecientes a terceros y/o ayudan a invertirlos o a transferirlos, por ejemplo:

1. Las que gestionan operaciones crediticias, incluyendo créditos para consumo, préstamos hipotecarios, factoring, financiación de operaciones comerciales y *leasing* financiero.
2. Las que emiten o administran medios de pago, tales como tarjetas de compra, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, "dinero electrónico", giros y cheques de viajero.
3. Las que negocian, por cuenta propia o de terceros, billetes de banco, instrumentos monetarios, metales preciosos amonedados o no, títulos valores y derivados financieros.
4. Las prestadoras del servicio de transferencia electrónica de dinero.
5. Las que ofrecen o distribuyen cuotas partes o participaciones de cualquier tipo en fondos de inversión, nacionales o extranjeros.
6. Las que administran inversiones de terceros en cualquier clase de activos.
7. Las que realizan inversiones para terceros como asesores o consultores financieros bursátiles, inmobiliarios o de cualquier otro tipo.
8. Las empresas unipersonales y sociedades que desarrollan las siguientes actividades, estén o no incluidas expresamente en su objeto social:
 1. Transporte de caudales.
 2. Transporte de cargas y mercancías.
 3. Prestación de servicios postales de cualquier naturaleza.

9. Los operadores y/o explotadores privados de juegos de azar.
10. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual consista en:
 1. La compra, venta o permuta de monedas y medallas y/o sellos postales y sus respectivas colecciones.
 2. La compra, venta, exportación, importación o labrado de joyas y objetos artísticos que contengan metales y/o piedras preciosas.
 3. La compra, venta, exportación e importación de obras de arte, objetos arqueológicos y antigüedades.
11. Las asociaciones, ligas, federaciones y/o confederaciones organizadoras y reguladoras de torneos y competencias deportivas profesionales que autoricen y/o registren los contratos de las entidades afiliadas con sus jugadores, representantes y empresarios y con otras entidades y organizaciones del país y del extranjero.
12. Los escribanos titulares de registros notariales y sus adscritos.
13. Los organismos que autoricen y/o registren los actos por los que se constituyan y/o transmitan derechos reales, incluidos el de dominio sobre inmuebles y toda otra clase de bienes registrables.
14. Las entidades u organismos de gestión colectiva de derechos intelectuales y conexos, fiscalización y recaudación de aranceles, regalías y otras contraprestaciones por la utilización en cualquier forma de las obras registradas y/o protegidas.
15. Los contadores públicos, auditores y sociedades de profesionales en ciencias económicas que emitan dictámenes requeridos por las leyes y reglamentos aplicables, sobre los estados contables y financieros de sociedades y otras personas jurídicas, sobre la reorganización de éstas y/o sobre documentación relativa a la emisión y colocación mediante oferta pública o privada, en el país o en el extranjero de títulos valores representativos de capital o deuda.
16. Los abogados que emitan dictámenes legales requeridos por normas aplicables en el país o en el extranjero para la oferta y colocación de títulos valores emitidos por sociedades u otras personas jurídicas domiciliadas en el país.

Art. 8º — Al iniciar o entablar cualquier relación financiera, comercial, profesional o de servicio, aunque sea ocasional, los sujetos enumerados en el artículo anterior deben verificar y registrar la identidad y domicilio o residencia del cliente o contraparte y la representa-

tividad de sus personeros mediante la presentación de documentos fehacientes, tales como:

- a) En el caso de personas individuales: documentos nacional de identidad, libreta cívica, libreta de enrolamiento, cédula de Policía Federal o provinciales, permiso de residencia, pasaporte o documento de identificación válido en el país de procedencia, clave única de identificación tributaria, clave única de identificación laboral, y acreditación de domicilio;
- b) En el caso de personas jurídicas: contrato social, estatuto, carta orgánica o documento constitutivo, acompañado de constancias de su inscripción o registro y de su vigencia, actas de las deliberaciones del o de los órganos de la persona jurídica por las que fueron designados los miembros de los órganos de administración, fiscalización y representación;
- c) En todos los casos en que el cliente o la contraparte actúen por intermedio de mandatarios: los instrumentos jurídicos por los que hayan sido instituidos, creados conforme a las leyes del lugar de otorgamiento, debidamente autenticados o legalizados, cuando corresponda;
- d) Cuando la persona jurídica sea una sociedad de las denominadas *off shore*, o una entidad "de fachada" que no realiza ningún tipo de actividad económica en el país de su domicilio y sede legal, y existan razones para suponer que quienes actúan como sus representantes lo hacen, en realidad, por cuenta y orden o en beneficio de terceros cuya identidad mantienen oculta, se deberán adoptar todas las medidas razonablemente a su alcance para determinar la verdadera titularidad de los reales socios o beneficiarios de las operaciones.

Art. 9º — Las entidades enumeradas en el artículo 7º, deberán conservar la documentación respaldatoria exigida en el artículo precedente, hasta cinco años después de concluida la relación con el cliente o contraparte, exhibiéndolas y poniéndolas prontamente a disposición de la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes y/o de los jueces, del Ministerio Público y de los tribunales competentes cuando ello sea requerido a los fines de una investigación o proceso penal por lavado de dinero o encubrimiento de lavado de dinero.

CAPÍTULO IV

Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes

Art. 10. — La Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes es una unidad central especializada de control, información y análisis financiero con autonomía funcional, que se desempeñará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Art. 11. — Compondrán la Unidad no menos de siete (7) ni más de nueve (9) profesionales, expertos en disciplinas jurídicas y económicas, designados por concurso en mérito a su idoneidad, acreditada mediante comprobados antecedentes profesionales, conocimientos

científicos y experiencia en la provención y detección temprana de la actividad delictiva internacional conocida como "lavado de dinero" y delitos subyacentes y conexos.

Art. 12. — La selección de los integrantes de la Unidad estará a cargo de un comité *ad hoc*, integrado por:

- Tres (3) miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por sus pares.
- Dos (2) miembros de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación elegidos por sus pares.
- Dos (2) miembros de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación elegidos por sus pares.

Art. 13. — Los expertos integrantes de la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes serán designados por un primer período de dos años, y podrán ser vueltos a designar, sin solución de continuidad y sin limitación, por períodos de cuatro años cada vez, alcanzándose las incompatibilidades fijadas por la ley para funcionarios públicos.

Art. 14. — Los integrantes no podrán desempeñar otras tareas en el sector público ni en el privado, pero podrán ejercer la docencia en los niveles universitario y terciario, dentro de límites compatibles con la dedicación indispensable para su eficaz actuación en la Unidad.

Art. 15. — Salvo inhabilidad o incapacidad sobreviniente, sus integrantes no podrán ser separados de sus cargos sin previo sumario administrativo en el que se observarán todos los recaudos del debido proceso adjetivo. Gozarán de una retribución equivalente a la de los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no podrá ser disminuida mientras dure su desempeño.

A los efectos de este artículo, la renovación de la designación al término de un período será considerada como continuación de una misma gestión y la incidencia de nuevas gabelas o de eventuales aumentos de alícuotas tributarias o previsionales no será considerada como disminución de la retribución.

Art. 16. — Todas las decisiones de la Unidad, incluso la designación de su presidente y uno o más vicepresidentes y su cese y reemplazo, requieren el voto concurrente de más de la mitad de sus integrantes, que deben ser convocados, por medios fehacientes, por el presidente o vicepresidente o, en su defecto, por dos miembros cualesquiera, con tres días hábiles administrativos de intervalo entre la fecha de la convocatoria y la fijada para la reunión, salvo en los casos de extrema urgencia, en que la reunión podrá ser citada para un día hábil o feriado con intervalo de un día, hábil o feriado.

Art. 17. — El quórum será de más de la mitad de los integrantes de la Unidad, pero en los casos de extrema urgencia, si no se alcanzase ese número transcurrida una hora desde la fijada en la convocatoria, la minoría podrá adoptar, interinamente, las resoluciones que no admitan demora, sujetas a ratificación en una reunión posterior regularmente convocada con la antelación prevista para los casos ordinarios. Si tampoco se alcanza el quórum para constituir esta reunión, la resolución quedará tácitamente ratificada.

Art. 18. — La Unidad dictará su propio reglamento; emitirá directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, pertenecientes a la administración pública y al sector privado, y vigilará su cumplimiento; proyectará las normas legislativas y reglamentarias que estime adecuadas; y prestará al Ministerio Público Fiscal y a la justicia competente el asesoramiento y la asistencia técnica que éstos soliciten.

Art. 19. — Además de las funciones, facultades, deberes y responsabilidades específicamente determinadas en otras disposiciones de la presente ley y su reglamentación, es de incumbencia de la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes:

- a) Procesar y analizar los datos relativos al presunto lavado de dinero y actividades ilícitas subyacentes y conexas de que tome conocimiento, sea por gestión propia, por comunicación de particulares o de los organismos de control, supervisión y superintendencia, o por denuncias formuladas a los medios de comunicación y difundidas por éstos;
- b) Evaluar los informes acerca de operaciones y actividades sospechosas elevados por los organismos o entidades que se mencionan en el capítulo II de la presente ley, los que deberán suministrarle la información adicional y complementaria que requiera y facilitarle el acceso inmediato a sus respectivas bases de datos y archivos de documentación, de los que podrá extraer copias fehacientes. Podrá asimismo solicitar judicialmente, cuando haya motivos justificados, la incautación de documentos originales;
- c) Formular inmediatamente ante el Ministerio Público Fiscal la denuncia prevista en los artículos 174 a 176 y 181 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, cuando la evaluación e investigación a que se refiere el inciso precedente confirmen los indicios y corroboren la sospecha de la existencia de actividades y/u operaciones de lavado de dinero y/o delitos subyacentes y conexos en medida suficiente como para hacer viable la promoción de la acción penal de conformidad con el artículo 198, segunda parte, del Código citado. La denuncia deberá ser acompañada por todos los elementos probatorios conducentes acumulados y evaluados por la Unidad, que deberá prestar al Ministerio Público y, eventualmente, a los jueces y tribunales intervinientes, toda la cooperación que éstos requieran;
- d) Asesorar, evaluar e informar respecto a la idoneidad de los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación establecidos por los sujetos referidos en el capítulo II, en materia de prevención y detección temprana de actividades y operaciones de lavado de dinero, e indicar, cuando corresponda, la adopción de medidas correctivas, fijando plazo para su cumplimiento;

- e) Compilar, ordenada y sistemáticamente, toda la información que procese y la que le sea transmitida por organismos extranjeros e internacionales que cumplan funciones análogas. Esta información únicamente podrá ser utilizada con la finalidad de prevenir, contener, reprimir y erradicar el lavado de dinero y las actividades delictivas subyacentes y conexas;
- f) Organizar y administrar un archivo informático en el que se almacenarán, en texto completo, todas las sentencias judiciales condenatorias que dicten los tribunales nacionales en causas por lavado de dinero y/o delitos subyacentes y/o conexos, así como las pronunciadas por tribunales extranjeros que le sean oficialmente comunicadas, y los datos de las personas físicas y/o jurídicas sobre las que recaigan condenas, incluida su pertenencia a grupos económicos u organizaciones delictivas con actuación en uno o más países;
- g) Elevar a las Cámaras del Congreso de la Nación y/o a las comisiones asesoras que corresponda, una memoria anual detallada sobre su labor, incluyendo una autoevaluación de sus resultados, metas a alcanzar y términos de referencia, y propuestas concretas para mejorar su rendimiento;
- h) Aportar periódicamente al Ministerio Público Fiscal todos los informes de progreso sobre investigaciones en curso y demás tareas a su cargo que sean pertinentes;
- i) Conformar el Registro Único de Activos, el que tendrá inmediato acceso a la totalidad de los datos suministrados por los organismos de control, supervisión y/o superintendencia, citados en esta ley.

Art. 20. — La Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes dispondrá de los elementos técnicos y recursos materiales y humanos necesarios para su eficaz funcionamiento.

Art. 21. — Su actuación no deberá afectar indebidamente el normal desarrollo de las actividades lícitas, la reserva o secreto de las operaciones bancarias, la confidencialidad de las comunicaciones entre profesionales y sus clientes ni la privacidad de los individuos.

Art. 22. — Sus integrantes deben observar el más estricto secreto profesional. Con excepción de las comunicaciones al Ministerio Público Fiscal, a las demás expresamente previstas en la ley y a las que, en virtud de tratados bilaterales o multilaterales, curse a organismos extranjeros o internacionales que cumplan funciones análogas, y del deber de prestar declaración o evacuar informes a requerimiento de juez, tribunal u otra autoridad competente, les está terminantemente prohibido revelar o divulgar información obtenida en cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO V

De las operaciones sospechosas

Art. 23. — Los sujetos enumerados en el capítulo III que, en virtud de regímenes especiales, se encuentren

sometidos a control, supervisión o superintendencia de organismos o entidades estatales, paraestatales o de autorregulación profesional formularán ante éstos sus comunicaciones relativas a actividades u operaciones sospechosas de configurar lavado de dinero. Podrán igualmente hacerlo ante la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes si tuvieran motivos fundados para suponer que aquellos organismos o entidades no darán a la comunicación el tratamiento debido, o no lo harán con la premura necesaria para actuar eficazmente en la prevención y/o contención de la actividad presuntamente delictiva.

Quando se encuentren organizados en forma de empresa, los sujetos mencionados en el presente artículo deberán designar funcionarios del máximo nivel jerárquico responsables de arbitrar los medios que especifique la reglamentación para controlar las operaciones susceptibles de configurar lavado de dinero. Asimismo tendrán la responsabilidad de que sus gerentes y empleados participen en programas de capacitación y actualización permanente para la prevención y detección temprana de actividades y operaciones de lavado de dinero que administrará la Unidad.

Art. 24. — Los organismos de control, supervisión o superintendencia de organismos o entidades estatales, paraestatales o de autorregulación profesional deberán, asimismo designar funcionarios de máximo nivel jerárquico encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluidos el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de operaciones sospechosas.

CAPÍTULO VI

Penalidades por incumplimiento de los deberes de los sujetos obligados

Art. 25. — Si su conducta no encuadra en los supuestos de los artículos 1º y 2º, serán reprimidas con multa de hasta diez (10) veces el monto de las operaciones sospechadas las personas físicas y/o jurídicas que omitan sin justificación, comunicar prontamente a la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes, o a la autoridad en ejercicio de la supervisión, control o superintendencia que corresponda, sus sospechas de que determinada actividad u operación configura lavado de dinero y los indicios que las originan.

Incurrirán en igual penalidad quienes negligentemente revelen, a las personas bajo sospecha o a terceros, que determinada operación o actividad está siendo analizada o investigada en relación con su posible calificación de lavado de dinero, y las personas físicas y/o jurídicas que ejecuten o perfeccionen cualquier operación que, de acuerdo con los criterios definidos en la presente ley, pueda calificarse como sospechosa.

Art. 26. — Si su conducta no encuadra en los supuestos en los artículos 1º y 2º, serán reprimidos con multa de hasta diez (10) veces el monto de las operaciones sospechadas, las personas físicas y/o jurídicas que negligentemente dejen de dar cumplimiento, total o parcialmente, a los deberes de identificación de clientes y/o contrapartes y de registro de operaciones con

dinero efectivo, ni omitan suministrar a la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes la información y la colaboración que les solicite en relación con la investigación de actividades u operaciones determinadas, sospechosas de configurar lavado de dinero.

Art. 27. — Serán pasibles de las penalidades previstas en los artículos 25 y 26, los organismos de control, supervisión o superintendencia de organismos o entidades estatales, paraestatales o de autorregulación profesional, que incurran en las inconductas contempladas en ellos.

CAPÍTULO VII

Confidencialidad, secreto bancario y exención de responsabilidad

Art. 28. — Las personas individuales y los administradores, gerentes, mandatarios, representantes y dependientes de las personas jurídicas obligadas a cumplir los deberes establecidos en la presente ley que, por razón de su cargo, empleo o profesión, tomen conocimiento de que determinada actividad u operación está siendo investigada como sospechosa de lavado de dinero por la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes, la Justicia federal o el Ministerio Público, o un órgano competente de un Estado extranjero, y lo divulgan poniendo en riesgo el éxito de la investigación, se harán pasibles de prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial por doble tiempo.

Art. 29. — No serán aplicables, ni podrán invocarse por los sujetos obligados por la presente ley ni por terceros, las disposiciones legales referentes al secreto bancario o profesional y los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato, cuando el requerimiento de información sea formulado por un tribunal competente, con fundamento en esta ley, y en el marco de una investigación o proceso por lavado de dinero o encubrimiento de lavado de dinero.

Art. 30. — Las comunicaciones que, en virtud de lo dispuesto en la presente ley, efectúen de buena fe los sujetos obligados y sus administradores, gerentes, mandatarios, representantes y dependientes a la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes u otra autoridad competente, no serán consideradas violatorias del secreto bancario, financiero o profesional, ni de los compromisos de confidencialidad establecidos por ley, reglamento o contrato y no los harán incurrir en responsabilidad penal ni civil, aunque la existencia y naturaleza de la presunta actividad delictiva no tenga ni haya tenido confirmación ni corroboración.

CAPÍTULO VIII

Promoción y ejercicio de la acción penal. Juzgamiento y represión del delito de lavado de dinero

Art. 31. — Las tareas de promoción y ejercicio de la acción penal y de juzgamiento y represión por los delitos que contempla la presente ley, a cargo del Ministerio Público Fiscal y la Justicia federal, serán

complementadas, secundadas, apoyadas y auxiliadas por la acción, parcialmente centralizada de la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes y de los órganos y organismos obligados a informar por la presente ley.

CAPÍTULO IX

Competencia judicial

Art. 32. — Para la instrucción de las causas y enjuiciamiento de los acusados como autores, copartícipes o instigadores de los delitos que la presente ley reprime serán competentes los jueces y tribunales federales en lo criminal y correccional que correspondan en razón del lugar, de conformidad con los artículos 37 y 38 del Código Procesal Penal de la Nación, aunque el o los delitos subyacentes y/o conexos hayan ocurrido en otra jurisdicción territorial, sin perjuicio del trámite de extradición, cuando proceda conforme a derecho.

CAPÍTULO X

Medidas cautelares

Art. 33. — Los jueces y tribunales que conozcan en los procesos por lavado de dinero y/o encubrimiento de lavado de dinero, podrán ordenar, sin necesidad de notificación ni audiencia previas y conforme a derecho, embargos preventivos, secuestros, inhabilitaciones generales de bienes, prohibiciones de innovar y de contratar, y designar veedores, interventores informantes, recaudadores y/o administradores judiciales, así como dictar cualquier otra medida cautelar adecuada para la preservación, hasta su eventual decomiso, de los bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos que la presente ley reprime.

CAPÍTULO XI

Decomiso de bienes, productos o instrumentos

Art. 34. — Toda sentencia condenatoria por lavado de dinero o delito subyacente o conexo incluirá la pérdida de los bienes, productos e instrumentos relacionados con el delito, los que serán decomisados, salvo que pertenezcan a terceros no imputables ni responsables. En este último supuesto, o si por cualquier acto u omisión del condenado, o por caso fortuito o fuerza mayor, el decomiso resultare imposible, el tribunal ordenará la confiscación de cualesquiera otros bienes del condenado, por un valor equivalente, o le impondrá una multa por idéntico valor.

Art. 35. — Con arreglo a las normas de derecho procesal penal internacional, los tribunales argentinos cooperarán con sus similares de otros países, a su requerimiento, a los fines de la incautación y decomiso de bienes, productos o instrumentos situados en territorio nacional, relacionados con operaciones de lavado de dinero o conexas realizadas en infracción a las leyes penales del país requirente cuando los hechos, de haberse cometido en la República Argentina, ha-

brian sido penalmente punibles y reprimidos con una sanción mínima de tres (3) años de prisión para sus autores y partícipes necesarios.

CAPÍTULO XII

Destino de los bienes, productos o instrumentos decomisados

Art. 36. — Toda vez que, conforme al artículo anterior, se decomisen bienes, productos o instrumentos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, el tribunal competente podrá, conforme a derecho:

- a) Transferirlos en especie, o transferir el producto de su enajenación en pública subasta a la o las personas o entidades, estatales o privadas, que hayan participado directa o indirectamente en el decomiso y en las diligencias cautelares previas;
- b) Afectarlos a fondos especiales creados por ley del Congreso, cuya administración esté sometida a controles y auditorías independientes, destinados a la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos, el lavado de dinero, la prevención del uso indebido de drogas y el tratamiento, rehabilitación o reinserción social de los afectados por el consumo, mediante la actuación de organismos estatales o el otorgamiento de subsidios, subvenciones, donaciones o préstamos reembolsables o no, a entidades privadas e intergubernamentales que persigan igual finalidad;
- c) Transferir, total o parcialmente, los bienes decomisados o el producto de su venta a cualquier otro país que haya participado, directa o indirectamente, en la incautación o decomiso, o en las diligencias cautelares previas, si esa transferencia está autorizada por acuerdo internacional que incluya un compromiso de reciprocidad entre los Estados partes;
- d) Transferir los bienes decomisados, o el producto de su venta, a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el lavado de dinero y/o el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas sicotrópicas, la prevención de su uso indebido y/o el tratamiento, rehabilitación o reinserción social de los afectados por su consumo.

CAPÍTULO XIII

Protección de los terceros de buena fe

Art. 37. — Las medidas cautelares y la sanción de decomiso previstas en la presente ley, no podrán restringir ni cercenar en modo alguno, los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer por las vías legales y procesales que correspondan.

Art. 38. — Antes de adoptar una decisión final sobre la disposición de bienes, productos o instrumentos su-

jetos a decomiso, se haya intentado o no su desafección mediante tercería o cualquier otro procedimiento reglado, el tribunal debe a citar, por medios idóneos y otorgando un plazo razonable, que en ningún caso será menor de quince (15) días, para que se presenten a hacer valer sus derechos a todos los que puedan alegar un interés jurídico legítimo sobre los mismos.

Art. 39. — Los jueces y tribunales podrán inferir, de las circunstancias objetivas del caso, la falta de buena fe del tercero reclamante. Para obtener la devolución, el reclamante deberá probar:

- a) Interés jurídico legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos;
- b) Que no puede imputársele ningún tipo de participación, colusión o implicancia con las operaciones o actividades de lavado de dinero y/o delitos subyacentes o conexos objeto del proceso;
- c) Haber desconocido, sin ignorancia intencional, el uso ilícito de los bienes, productos o instrumentos, o no haberlo consentido voluntariamente en caso de haber tenido conocimiento del mismo;
- d) No haber adquirido los derechos que invoca sobre los bienes, productos o instrumentos, de quien se encuentre sometido a proceso o haya sido condenado por lavado de dinero, o delitos subyacentes o conexos, o de una persona interpuesta, en circunstancias que debieron llevarlo razonablemente a concluir que los derechos en cuestión le fueron transmitidos con la finalidad de evitar su eventual decomiso;
- e) Haber hecho todo lo razonable a su alcance para impedir el uso ilícito de los bienes, productos o instrumentos.

CAPÍTULO XIV

Cooperación internacional

Art. 40. — La Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes prestará a los tribunales nacionales competentes la asistencia técnica que éstos le requieran cuando actúen prestando colaboración a los tribunales de otros países en causas por lavado de dinero y/o delitos conexos o subyacentes.

Art. 41. — Si, entre la República Argentina y el Estado al que pertenece el juez o tribunal requirente de colaboración en un proceso por lavado de dinero y/o delitos subyacentes o conexos, no existe tratado vigente que reglamente la tramitación de exhortos y cartas rogatorias, los tribunales nacionales darán curso a los requerimientos de acuerdo con los principios aceptados de derecho procesal internacional y los que derivan de la premisa de la comunidad jurídica de los Estados. Podrán recibir y tomar medidas apropiadas relativas al suministro de originales o copias autenticadas de documentos y registros, comprendidos los de instituciones financieras y entidades gubernamentales;

la declaración de testigos domiciliados o residentes en el país; la facilitación de la presencia o disponibilidad voluntaria en el estado requerido de personas para prestar declaración, incluyendo aquellas que estén detenidas; la localización o identificación de personas; la entrega de citaciones; el examen de objetos y lugares; la realización de inspecciones e incautaciones; la facilitación de información y elementos de pruebas y la implementación de medidas cautelares.

CAPÍTULO XV

Disposiciones finales

Art. 42. — Esta ley entrará en vigencia a los 30 días de estar constituida y en funciones la Unidad de Información, Análisis y Control de Bienes.

Art. 43. — Deróganse el artículo 25 de la ley 23.737, la ley 24.450, el decreto 1.849/90, y el decreto 1.426/98 en lo referente a la Oficina de Apoyo Técnico-Administrativo a la Comisión Mixta creada por la ley 24.450.

Art. 44. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Carlos A. Alvarez. — Darío P. Alessandro.
— Diana B. Conti. — Pablo D. Fernández.
— Irma F. Parentella.*

ANEXO

Definiciones

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1º, inciso a) de la presente ley, por "estupefacentes" se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la lista I o en la lista II de la Convención Unica de las Naciones Unidas de 1981 en su forma enmendada. Por "sustancias sicotrópicas" se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las listas I, II, III y/o IV del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º, inciso b) de la presente ley, por actividades delictivas de grupos organizados se entienden las de las denominadas por las leyes, reglamentos y/o jurisprudencia de los tribunales de los países en que se realicen, "asociación ilícita", "conspiración", "confabulación", "conjura", "mafia", "organización criminal", "empresa criminal continua", "delito organizado", "organización corrupta infiltrada por delincuentes", o con expresiones afines.

3. A los efectos de las disposiciones de la presente ley, el concepto de "bienes" comprende los activos de cualquier tipo, corporales o incorporeales, muebles, inmuebles o semovientes, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

4. La expresión "delitos subyacentes y/o conexos" se refiere, genérica o colectivamente, a los ilícitos mencionados en el artículo 1º de esta ley.

5. Por "ignorancia intencional" debe entenderse, en el contexto de la presente ley, la deliberada omisión por una persona sujeta —en razón de su cargo y/o responsabilidad profesional— a especiales deberes de diligencia relativos a la prevención y detección temprana del lavado de dinero, o de los mínimos cuidados y precauciones exigibles, o un comportamiento que, sobrepasando los límites de la negligencia grave, resulte reveladora, a juicio del tribunal que conozca en la causa, de total indiferencia por las consecuencias sociales del lavado de dinero y el delito organizado.

6. Por "operaciones sospechosas" se entenderá a aquellas transacciones que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, así como también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, sin justificación económica o jurídica, o con características de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.

4

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y FINANCIERAS CON ACTIVOS PROVENIENTES DE ILÍCITOS

Artículo 1º — La presente ley tiene por objeto prevenir y reprimir el lavado de dinero y las actividades comerciales y financieras que se realicen con activos provenientes de:

- a) La actividad ilícita perpetrada por organizaciones o asociaciones con las características previstas en el artículo 210 bis del Código Penal;
- b) La actividad ilícita relacionada con el tráfico y comercialización de estupefacentes, el tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, de órganos humanos y de los delitos contra la administración pública, contemplados en el artículo 174, inciso 5º y en los capítulos VI, VII, VIII, IX bis y X del título XI del Código Penal de la Nación.

Art. 2º — A los fines de la presente ley se define el lavado de dinero como:

- a) Toda operación comercial o financiera tendiente a legalizar los recursos, bienes y servicios provenientes de actividades ilícitas o delictivas;
- b) La transformación de dineros obtenidos en forma ilegal, en valores patrimoniales, con el propósito de aparentar que se trata de una ganancia legal o legítima.

Se entiende por operaciones comerciales y financieras: la inversión, la compraventa, la pignoración, la transferencia, la cesión o la transformación de las ganancias, cosas o bienes provenientes de los delitos o del beneficio económico obtenido de los mismos.

El delito tipificado en la presente ley incluye:

- a) La adquisición de bienes y la utilización de capitales o de bienes de los que se conoce su origen ilícito;
- b) La disimulación o disfraz de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de los capitales o de los bienes de los que se conoce su origen ilícito con el objeto de ayudar a escapar de las consecuencias jurídicas resultantes de estos actos a las personas implicadas en la ejecución de los delitos originadores de los capitales;
- c) La participación en uno de los actos previstos en los puntos precedentes, la asociación para cometer el acto mencionado, las tentativas de perpetración, el hecho de ayudar, incitar o aconsejar a alguien para cometerlo o facilitar su ejecución;
- d) El transporte y el ocultamiento de los mismos.

Art. 3º — Créase la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y de Prevención de Actividades de Lavado, que dependerá del Ministerio de Justicia de la Nación, con funciones de:

- a) Solicitar información, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
- b) Recibir, procesar y analizar la información que los distintos obligados a informar —determinados por esta ley— le remitan;
- c) Comunicar a las autoridades competentes aquellas operaciones que a su juicio puedan configurar actividades de lavado de dinero o de activos provenientes de ilícitos para que se ejerzan las acciones correspondientes;
- d) Organizar y administrar los archivos y antecedentes relativos a su propia actividad obtenidos en el ejercicio de sus funciones;
- e) Celebrar acuerdos y convenios de cooperación con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informáticas del mismo carácter.

Art. 4º — La UNIF gozará de autonomía funcional y estará integrada por el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, el presidente del Banco Central de la República Argentina y por el procurador general de la Nación.

Art. 5º — Dictará su propio reglamento interno y tomará sus decisiones por mayoría de miembros.

Su presidente será designado de entre sus miembros por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 6º — La UNIF cumplirá su cometido a través de una secretaria ejecutiva, dirigida por un funcionario cuyo cargo será el de secretario ejecutivo. Tendrá jerarquía de director y será designado por la UNIF.

La secretaria ejecutiva estará integrada por cuatro funcionarios propuestos por los integrantes de la UNIF.

Dichos funcionarios tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándose las incompatibilidades fijadas por la ley para los funcionarios públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por resolución fundada de la UNIF, aprobada por el Poder Ejecutivo.

Durarán un período de tres (3) años en sus cargos, el que podrá ser removido en forma indefinida.

Deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- 1º Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho o disciplinas relacionadas con las ciencias económicas
- 2º Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
- 3º No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación, las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tener ni haber tenido vinculación directa con los obligados a informar.

Art. 7º — Los datos, archivos e información que maneje la UNIF será secreta, salvo orden judicial competente y deberá ser archivada por el término de diez (10) años según las formas que la reglamentación indique.

Los funcionarios o empleados de la UNIF, las personas físicas o jurídicas obligadas a informar y las personas vinculadas laboralmente a ellas que hicieran públicas o divulgaran datos o información presentada ante la UNIF, serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a cuatro años y multa.

Las informaciones obtenidas por la UNIF sólo podrán ser utilizadas para la investigación de las conductas descritas en la presente ley.

Art. 8º — En virtud de la presente ley están obligados a informar a requerimiento de la UNIF.

- 1º Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y las sujetas a la ley 18.924.
- 2º Las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual, operen en la compraventa de divisas bajo la forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o de pago.
- 3º Las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual exploten juegos de azar.
- 4º Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
- 5º Los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuro y opciones, cualquiera sea su objeto.

- 8º Los registros públicos de la propiedad, registros públicos de comercio y los organismos administrativos de fiscalización o control de personas jurídicas.
- 7º Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad inmobiliaria, compraventa de obras de arte, armas, joyas automóbiles, barcos aeronaves, objetos arqueológicos o coleccionables u otros bienes suntuarios y a la negociación o elaboración de bienes con metales o piedras preciosas.
- 8º Las compañías aseguradoras y sus intermediarias.
- 9º Los escribanos matriculados.
10. Los profesionales matriculados cuya actividad esté regulada por los consejos profesionales de ciencias económicas.
11. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito.
12. Las empresas dedicadas al transporte de caudales, cargas o mercancías.
13. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales.

Las personas señaladas precedentemente deberán recabar de sus clientes o requirentes —previo a realizar cualquier tipo de actividad e las que tuvieren por objeto—, la documentación que permita acreditar la identidad domicilio y demás datos a fin de identificarla e individualizarla fehacientemente.

Cuando los clientes a requirentes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a fin de obtener la identidad real de la persona o personas representadas.

Art. 9º — Las entidades bancarias o financieras deberán informar a la UNIF los datos de los titulares de cuentas corrientes o de ahorro, y de plazos fijos, en moneda nacional o extranjera, en los que se registren ingresos superiores a pesos cincuenta mil (\$ 50.000) o su equivalente en otras monedas, en un mes calendario o pesos doscientos cincuenta mil (\$ 250.000) o su respectivo equivalente en otras monedas, en un año calendario.

A tales fines se deberán informar sobre todas las cuentas de cada tipo en las que tengan intervención los mismos titulares o alguno de ellos.

Asimismo deberán ser informados los titulares de cuentas o de mutuos que en el curso de un mes o de un año, concreten pagos o entregas de efectivo, que alcancen los importes antes señalados, ya sea en concepto de servicios de amortización o de cancelación, así como la cancelación anticipada de los mismos, la constitución de fideicomisos u otros negocios fiduciarios.

Las operaciones que se encuentren registradas o sean efectuadas por más de un titular o por apoderado serán informadas con los datos de todos los que intervengan en ellas.

Art. 10. — Asimismo los obligados según los incisos 7º, 9º y 10 del artículo 4º deberán informar las operaciones en las que intervengan y realice una misma persona física o jurídica o personas físicas o jurídicas vinculadas que alcancen o superen la suma de pesos doscientos

cincuenta mil (\$ 250.000) o su equivalente en otras monedas, por la compraventa de bienes muebles o inmuebles, de títulos valores —públicos o privados— o de cuotas partes de fondos comunes de inversión, venta de metales preciosos, venta de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de viajero, pago de importaciones y la venta de carteras de entidades financieras.

Art. 11. — Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, los intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos y los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuro y opciones, cualquiera sea su objeto deberán informar las operaciones de compraventa de títulos valores —públicos o privados— o de cuotas partes de fondos comunes de inversión, venta de metales preciosos, giros o transferencias emitidos (internos o con el exterior), compraventa de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de viajero, pago de importaciones, venta de cartera de la entidad financiera a terceros y toda otra operación que en efectivo alcance o supere la suma de pesos cincuenta mil (\$ 50.000) o su equivalente en otras monedas, en un mes calendario, o pesos doscientos cincuenta mil (\$ 250.000) o su respectivo equivalente en otras monedas, en un año calendario.

Art. 12. — Las empresas emisoras de tarjetas de crédito deberán informar las facturaciones que alcancen o superen el máximo anual de pesos doscientos cincuenta mil (\$ 250.000) establecido por esta ley.

Las empresas dedicadas al transporte de caudales, cargas o mercancías deberán individualizar a los clientes e informar a la UNIF cuando el valor de lo transportado alcance o supere la suma de pesos doscientos cincuenta mil (\$ 250.000) ya sea en efectivo o en valores.

Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales deberán llevar un registro que permita individualizar los titulares de la recepción o emisión de giros por los importes mínimos y máximos arriba señalados e informar dichas operaciones a la UNIF.

Art. 13. — En todos los casos los obligados deberán informar además toda operación o actividad sospechosa o inusual, aunque no alcance los montos fijados por esta ley, en la que deban intervenir.

Art. 14. — *Operación sospechosa o inusual.* A los fines de la presente ley se consideran operaciones sospechosas con obligación de ser informadas a la UNIF y denunciadas por ésta, de conformidad con la reglamentación pertinente, aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate o por su magnitud, no resulten habituales o resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica aparente o sean realizadas con innecesaria complejidad, ya sea en forma aislada o reiterada.

Art. 15. — Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a diez (10) años y multa de dos a diez veces el monto de la operación, el que sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los ilícitos enumerados en el artículo 1º, interviniera en operaciones de inversión, compraventa, pignoración, transferencia o ce-

sión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquéllos o del beneficio económico obtenido de los mismos.

Con la misma pena será reprimido el que comprare, guardare, receptare u ocultare dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios, conociendo o debiendo haber sospechado el origen de los mismos.

Las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo para el funcionario público que, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, participe de los delitos previstos en esta ley.

Se entenderá que el monto de la operación es el valor real de mercado de los bienes o recursos, según corresponda.

Art. 16. — Las personas físicas o jurídicas obligadas a informar que omitan dicho cometido sin causa justificada, serán reprimidas con multa de diez a cincuenta veces el monto de la operación no informada, siempre que el hecho no constituya un delito más grave.

Art. 17. — Cuando de las informaciones aportadas surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se intenta cometer o se ha cometido un delito de legitimación de recursos, bienes o dinero, la UNIF remitirá copia de las actuaciones al Ministerio Público a fin de que formule requerimiento de instrucción ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Art. 18. — El dinero y demás bienes o recursos confiscados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo, destinado a financiar los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y los de capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

Estará constituido además por el producido de la venta y la administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también por las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda por resolución fundada de autoridad judicial competente.

Art. 19. — *Competencia de la justicia federal.* Será competente la justicia federal para entender en los procesos por los delitos previstos en esta ley.

Art. 20. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel A. Pichetto.

5

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

CAPÍTULO I

Artículo 1º — *Ámbito de aplicación.*

1. La presente ley regula las obligaciones, actuaciones, procedimientos y sanciones para preve-

nir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de la actividad económica, para la legitimación de capitales u otros bienes procedentes de:

- a) Actividades delictivas realizadas por bandas armadas o grupos organizados;
- b) Actividades delictivas relacionadas con el tráfico y comercialización de estupefacientes;
- c) Actividades delictivas relacionadas con el tráfico de seres humanos, la pornografía y prostitución forzadas;
- d) Actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas;
- e) Actividades delictivas contra la administración pública contempladas en el artículo 174 inciso 5), o en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI del Código Penal de la Nación.

2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por legitimación la adquisición, utilización, conversión o transferencia de capitales u otros bienes que procedan de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el apartado anterior o de la participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos, destino o de la propiedad efectiva, derechos o control sobre los mismos, aun cuando las actividades que los generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

CAPÍTULO II

Art. 2º — *Sujetos obligados.* Quedarán sujetos a las obligaciones de la presente ley:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual, operen en la compraventa en moneda extranjera o a la transmisión de fondos dentro y fuera del país.
4. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
5. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de título de valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
6. Los agentes intermediarios inscritos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.

7. Los registros públicos de propiedad, registros públicos de comercio y los organismos administrativos de fiscalización y control de personas jurídicas.
8. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad inmobiliaria, compraventa de obras de arte o antigüedades, inversión filatélica o numismática, y a la negociación o elaboración de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
9. Las empresas aseguradoras.
10. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito.
11. Los escribanos matriculados.
12. Las empresas dedicadas al transporte de cargas y mercancías.
13. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
14. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales.

Art. 3º — *Obligaciones.* Los sujetos mencionados en el artículo precedente quedarán sometidos a las siguientes obligaciones:

- a) Exigir la presentación de los documentos acreditativos de la identidad de sus clientes. Cuando el cliente sea persona física, deberá presentar documento nacional de identidad, permiso de residencia, pasaporte o documento de identificación válido en el país de procedencia, número de identificación tributaria y acreditación de domicilio.

Quando el cliente sea una persona jurídica, deberá exigirse la presentación del estatuto vigente, constancia de inscripción, designación de autoridades y número de identificación tributaria.

Quando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán información precisa a fin de conocer la identidad de los representantes, apoderados, gestores de negocios y autorizados, así como de las personas por cuenta de las cuales actúan.

La obligación de identificación de los clientes quedará exceptuada cuando se trate de operaciones cuyo importe no supere los cinco mil pesos o su equivalente en moneda extranjera. Cuando se aprecie que los clientes fraccionan la operación en varias con el fin de eludir el deber de identificación, se sumará el importe de todas ellas y se procederá a exigir su identificación. Igualmente, existirá el deber de identificación en aquellas operaciones que presenten indicios o certeza de que están relacionadas con la legitimación de capitales o bienes procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1º, aun cuando el importe de éstas sea menor al indicado en el presente artículo;

- b) Examinar cualquier operación con independencia de su cuantía que pueda estar vinculada

a la legitimación de capitales o bienes procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1º;

- c) Informar inmediatamente a la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos creada por el artículo 13 de la presente ley, cualquier hecho u operación sospechosa de estar relacionado con la legitimación de bienes o capitales. A los efectos de la presente ley, se consideran obligaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, así como también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada;
- d) Comunicar a la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos:

1. Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de billetes o medios de pago al portador por importes superiores a treinta mil pesos o su equivalente en moneda extranjera.
2. Las operaciones que por su volumen o naturaleza no se correspondan con la actividad o antecedentes operativos de los clientes.
3. Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique, venga siendo abonada mediante ingresos en efectivo por un número elevado de personas.

La obligación de comunicar no será de aplicación cuando por tratarse de operaciones relativas a clientes habituales y respecto de los que los sujetos obligados conozcan suficientemente la licitud de sus actividades, no concurren las circunstancias previstas en el inciso c) del presente artículo;

- e) Las comunicaciones a las que se refieren los incisos c) y d) del presente artículo se efectuarán a través de los órganos de control interno enunciados en el inciso f) del presente artículo y deberán contener la siguiente información:

1. Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y el concepto de su participación.
2. Relación de las operaciones y fechas a que se refieren con indicación de su naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución, finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados.
3. Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse la sospecha o certeza de vinculación de la operación a la legitimación de bienes o capitales provenientes de las actividades enumeradas en el artículo 1º;

- f) Colaborar con la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos, facilitando la información que ésta requiera en el ejercicio de sus competencias. Dicha información podrá versar sobre cualquier dato o conocimiento obtenido por los sujetos obligados respecto de las operaciones que realicen y las personas que en ellas intervengan;
- g) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento con la presente ley;
- h) Abstenerse de ejecutar cualquier operación de las señaladas en el inciso c) del presente artículo sin haber efectuado previamente la comunicación prevista en dicho inciso. No obstante, cuando dicha abstención no sea posible en razón de la naturaleza de ésta, o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación, los sujetos obligados podrán llevarla a cabo, efectuando la comunicación inmediatamente después de la ejecución, indicando la razón por la que no pudo proceder a informar previamente a la ejecución de la operación;
- i) Conservar durante un período mínimo de cinco años los documentos o registros que acrediten adecuadamente la realización de las operaciones y la identidad de los sujetos que las hubieran realizado, conforme lo requerido en el inciso 1 del presente artículo;
- j) Establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir o impedir la realización de operaciones relacionadas con la legitimación de capitales y bienes provenientes de las actividades enumeradas en el artículo 1º. La idoneidad de dichos procedimientos y órganos será supervisada por la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos, que podrá proponer las medidas correctoras oportunas;
- k) Adoptar las medidas oportunas para que los empleados de la entidad tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta ley. Estas medidas incluirán la elaboración, con la participación de los representantes de los trabajadores, de planes de formación y cursos para que los empleados estén capacitados para detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de bienes y capitales y para conocer la manera de proceder en estos casos.

Art. 4º — *Exención de responsabilidad.* La comunicación de buena fe de las informaciones contempladas en el artículo 3º, incisos c) y d), y las medidas dispuestas en cumplimiento del inciso h) de dicho artículo por el sujeto obligado o, excepcionalmente, por sus directivos o empleados, no constituirán violación de las restricciones sobre revelación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria, y no implicará para los sujetos obligados, sus directivos o empleados, ningún tipo de responsabilidad.

CAPÍTULO III

Art. 5º —

1. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años y multa de cinco a veinte veces el monto de la operación:
 - a) El que convierta, transfiera, adquiera o utilice dinero, recursos o bienes precedentes de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el artículo 1º, o que mediante cualquier acto u omisión realice toda otra operación respecto de tales bienes recursos o dinero, siempre que hubiese conocido el origen de los mismos;
 - b) El que oculte o encubriere la naturaleza, el origen, la localización, los movimientos, el destino o la propiedad, los derechos o el control sobre los capitales o bienes a sabiendas de que proceden de las actividades enumeradas en el artículo 1º.
2. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a tres años y multa de dos a diez veces el monto de la operación el que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo realizare cualquier acto u omisión enumerados en el inciso 1 de este artículo.

Art. 6º — La responsabilidad penal por los delitos previstos en esta ley alcanzará a quienes obren legal o voluntariamente por otro.

Art. 7º — Las personas físicas o jurídicas que incumplan en forma injustificada con la obligación impuesta en el artículo 3º, incisos c), g) o h) de la presente ley serán reprimidas con multa de cinco a veinte veces el monto de la operación sospechada, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Art. 8º — Las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación impuesta en el artículo 3º, incisos a), d), f), i), j), o k) serán reprimidas con multa de dos a doce veces el monto de la operación sospechada.

Art. 9º — Además de la responsabilidad que pudiere corresponder a la entidad obligada, quienes ejerzan en ella cargos de administración o dirección, sean unipersonales o colegiados, serán responsables de los delitos enumerados en los artículos 7º y 8º cuando éstos sean imputables a su conducta dolosa o negligente.

Art. 10. — Los funcionarios o empleados de la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos que incumplan la obligación impuesta en el artículo 27 serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a cuatro años y multa de dos a quince veces el monto de la operación sospechada.

Art. 11. — Las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo para el funcionario público que, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, participe de los delitos previstos en esta ley.

Art. 12. — En todos los casos, el producto de las actividades provenientes de los delitos previstos en esta

3. Colaborar, cuando fuere requerido por los órganos judiciales o el ministerio público, con las actividades de investigación que éstos desarrollen relacionadas con la prevención, investigación y sanción de la legitimación de bienes y capitales provenientes de las actividades enumeradas en el artículo 19.
4. Requerir y coordinar la información obrante en los distintos organismos del Estado con el fin de detectar posibles hechos relacionados con la legitimación de bienes o capitales.
5. Contribuir a la capacitación de funcionarios públicos y privados y los sujetos enumerados en el artículo 29 de la presente ley, en las técnicas de investigación y prevención del delito de legitimación de bienes y capitales.
6. Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.
7. Colaborar en forma recíproca con las autoridades de otros Estados que ejerzan competencias análogas con el fin de prevenir, perseguir y detectar operaciones de legitimación de capitales procedentes de ilícitos.

Art. 24. — La Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos está facultada para:

1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije.

Cuando se trate de personas físicas o jurídicas sometidas al control o superintendencia de un organismo público, la información a que se refiere el párrafo anterior deberá requerirse, en primer lugar, al órgano de control respectivo.

No podrá oponerse a la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos disposición alguna que establezca el secreto de la información requerida.

2. Recibir declaraciones espontáneas. También podrá recibir toda manifestación voluntaria, verbal o escrita, de los interesados.
3. Oponerse a la ejecución de cualquier operación o acto informado conforme los términos de la presente ley, antes de su realización, únicamente cuando existan indicios serios, graves y concordantes de que se trata de una actividad de las sancionadas en el artículo 5º de la presente ley, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

La oposición se notificará por cualquier medio fehaciente y suspenderá la ejecución por un plazo de veinticuatro (24) horas a partir de la notificación. La suspensión podrá prolongarse por orden judicial.

Art. 25. — Los funcionarios públicos que conocieran hechos que puedan constituir indicio o prueba de legitimación de bienes o capitales procedentes de las actividades enumeradas en el artículo 1º de la presente ley, deberán informar de ello por escrito a la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos.

Art. 26. — La Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos recibirá informaciones, manteniendo en secreto la identidad del informante.

La Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos dejará asentadas la totalidad de las denuncias e informaciones que recibiere por el término de cinco años.

No estará obligada a investigar todas las informaciones que reciba, sino que dispondrá las investigaciones en función de la verosimilitud del hecho sospechado.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el artículo 39 de esta ley podrán formular denuncias ante la Comisión de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos.

Art. 27. — Los funcionarios o empleados de la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos tienen el deber de mantener estrictamente el secreto respecto de las informaciones recibidas y las investigaciones realizadas.

Art. 28. — Cuando de las informaciones aportadas o de las investigaciones dispuestas o dirigidas por la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos surgieron elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido un delito de legitimación de bienes o capitales, la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos remitirá copia de las actuaciones al ministerio público a fin de que formule requerimiento de instrucción ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Las informaciones obtenidas por la Comisión de Prevención de Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos sólo podrán ser utilizadas para la investigación de las conductas descritas en la presente ley.

Art. 29. — Deróguese el artículo 25 de la ley 23.737, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90.

Art. 30. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Elisa M. A. Carrió. — Darío P. Alessandro,
— Juan P. Cafiero. — Elisa B. Carca.
— Melchor R. Cruchaga. — Nilda C.
Garré. — Mario R. Negri.*

SESIONES ORDINARIAS

1999

ORDEN DEL DIA N° 1999

FE DE ERRATAS

En la página 8662, donde dice:

Art. 18. — El cumplimiento de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 18. — El cumplimiento de buena fe, de las investigaciones dispuestas o dirigidas por la UIF, surgieren elementos de convicción suficiente para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerzan la acción penal.

Debe decir:

Art. 18. — El cumplimiento de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 19. — Cuando de las informaciones aportadas o de las investigaciones dispuestas o dirigidas por la UIF, surgieren elementos de convicción suficiente para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerzan la acción penal.